



Facultad de Derecho
Universidad Zaragoza



Universidad Zaragoza

El contrato de mudanza

Régimen Jurídico y realidad práctica

Curso 2016 – 2017
Grado en Derecho
Trabajo Fin de Grado
Tutor: Mercedes Zubiri de Salinas
Alumno: Ariana Torres Sánchez

“Si hay un secreto del buen éxito reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista así como del propio”.

Henry Ford

Inventor, automovilista y revolucionario del transporte

ÍNDICE

ABREVIATURAS

- I. INTRODUCCIÓN
 - 1. Cuestión tratada
 - 2. Razones de elección del tema y su justificación
 - 3. Metodología
- II. MARCO JURÍDICO APLICABLE
 - 1. La regulación anterior a la Ley de Contratos de Transporte Terrestre de Mercancías.
 - 2. Régimen jurídico actual
- III. CONCEPTO
 - 1. Tipos
 - 2. Las partes contratantes
- IV. LA DOCUMENTACIÓN
 - 1. La obligación de presentar un presupuesto
 - 2. El inventario
 - 3. Consecuencias de la no realización o aprobación del inventario
- V. LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES
 - 1. Obligaciones del porteador
 - 1.1 Obligaciones de carga y descarga
 - 1.2 La obligación de información
 - 1.3 Deberes administrativos del porteador
 - 2. Obligaciones del cargador/destinatario
- VI. RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR
 - 1. Régimen de responsabilidad
 - 2. Presunciones de exoneración en el contrato de mudanza
 - 2.1 Causas generales
 - 2.2 Causas privilegiadas
 - 2.2.1 Deficiencias en el embalaje o marcado de los bienes realizado por el cargador
 - 2.2.2 La manipulación efectuada por el cargador
 - 2.2.3 Carga o descarga de bienes cuya dimensión o peso no sea adecuado para los medios de transporte acordados, siempre que el porteador haya avisado al cargador del riesgo de daños y éste hubiera insistido en la ejecución de la prestación
 - 2.2.4 Falsedad o incorrección de la información proporcionada por el cargador
 - 2.2.5 Transporte de animales vivos o de plantas
 - 2.2.6 Naturaleza propia de los bienes objeto de la mudanza
 - 2.3 La prueba en contrario
- VII. LA LIMITACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

VIII.

IX. RESERVAS

X. CONCLUSIONES

XI. FUENTES CONSULTADAS

XII. ANEXO DE UN CONTRATO-TIPO DE MUDANZA

ABREVIATURAS UTILIZADAS

CC: Código Civil.

CCo: Código de Comercio.

LCTMM: Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías.

LOTT: Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

RLOTT: Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

LGDCU: Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

LCGC: Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación.

AP: Audiencia Provincial.

TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

FEDEM: Federación Española de Empresas de Mudanzas.

CMR: Convenio de Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, Ginebra el 19 de mayo de 1956.

I. INTRODUCCIÓN

1. CUESTIÓN TRATADA

Nuestro trabajo va a tener como objetivo el estudio del contrato de mudanza como una modalidad específica en el transporte de mercancías y su realidad práctica en relación con el régimen jurídico aplicable.

Respecto al régimen jurídico aplicable debemos tener en cuenta que la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, actualizó el régimen de los contratos de mudanza. Se introdujo un Capítulo nuevo en el articulado que regula actualmente el contrato de mudanza como un contrato de transporte con especificidades. Se regula como transporte que recae sobre un objeto especial que conlleva unas obligaciones accesorias igualmente especiales.

Es un contrato bilateral o sinalagmático, los dos contratantes, el porteador y el cargador, quedan obligados recíprocamente. El porteador es la empresa de mudanzas y el cargador o destinatario, suele coincidir con un consumidor aunque también las empresas, profesionales y las administraciones públicas hacen uso de este tipo de contratos para llevar a cabo el transporte y las diferentes prestaciones que incluye este tipo de contrato. Por este motivo, debemos tener muy presentes las disposiciones aplicables a los contratos realizados con consumidores y usuarios y, por otro lado, las normas relativas a las administraciones públicas como entes públicos que pueden realizar este tipo de acuerdos.

En la práctica es frecuente ver como las empresas que realizan este tipo de contratos también incluyen otra serie de prestaciones, como, por ejemplo, servicios de guardamuebles o trasteros.

Además se ha podido observar recientemente un intrusismo de empresas no autorizadas. Esto es lo que la Federación Española de Mudanzas¹ intenta actualmente evitar, dando unas garantías en la contratación y un seguro para que la mudanza se realice sin el menor riesgo posible.

La extraordinaria expansión de las redes de comunicaciones electrónicas y en especial de Internet, junto con la incorporación de ésta vía a la vida económica y a la

¹ En la página oficial <https://fedem.es/> encontramos todo tipo de información al respecto.

actividad comercial, hacen muy fácil la inserción en las contrataciones con personas no facultadas legalmente. Existe una amplia variedad de anuncios, aplicaciones, etc. en Internet que no cumplen con la legalidad; diferentes personas se ofrecen a prestar estos servicios sin ningún tipo de contrato, garantía ni seguro.

Aunque no vamos a entrar a analizar detalles en el presente trabajo, está claro que de momento no ha sido posible eliminar del sector a este tipo de empresas o particulares que siguen llevando a cabo la práctica de manera totalmente ilegal aunque en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, se incluyeron mecanismos para proteger la competencia de todos los que participan en el mercado.

2. RAZONES DE ELECCIÓN DEL TEMA Y SU JUSTIFICACIÓN

Los motivos que me han llevado a elegir este tema como objeto de estudio son muy variados.

Es interesante la regulación del contrato de mudanza como un contrato de transporte con especialidades en su régimen jurídico, destacable sobre todo las especificidades en lo referente al objeto y a la responsabilidad de las partes. De ahí que el contrato del cual estudiamos no sea un simple contrato de transporte. Además del transporte integra una serie de prestaciones variadas como son la carga y descarga, la estiba y desestiba, el montaje, etc. Me ha parecido interesante destacar cada una de ellas y su valor en la práctica.

Como anteriormente no existía regulación específica al respecto en este tipo de contrato tan característico, me ha resultado de interés repasar la regulación actual vigente en la nueva ley del transporte (LCTTM) que ha introducido aspectos especiales y propios del contrato de mudanza.

Por otro lado, es importante resaltar, antes de entrar a estudiar el contrato de mudanza, cómo ha afectado la enorme crisis económica que ha sufrido nuestro país en los últimos años. La crisis ha hecho que numerosas empresas del sector hayan tenido que dejar de prestar sus servicios.

Con lo cual, el nivel de empresas en el sector de la mudanza se ha reducido esencialmente.

3. METODOLOGÍA

Respecto a la metodología seguida en el trabajo y la distribución mantenida a lo largo del mismo podemos hacer una breve referencia a las fuentes utilizadas y a las diferentes partes que he desarrollado.

Respecto a las fuentes escogidas, he utilizado diferentes medios de información. La fuente principal que he aplicado ha sido la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancía. No obstante, para complementar el trabajo he utilizado diferentes publicaciones que tienen que ver con la materia y con el contrato de transporte terrestre de manera general y el de mudanza de manera especial, además de apoyarme en varios artículos doctrinales que me han servido de gran ayuda para la elaboración del tema desarrollado. Además, he reflejado cuál es el tratamiento que han realizado los Tribunales sobre este asunto. Por lo cual, he utilizado diferentes sentencias sobre todo del Tribunal Supremo y de las diferentes Audiencias Provinciales con la intención de ver qué vertiente reflejaban cada uno de ellos en los puntos más controvertidos y así poder basar algunas de mis opiniones.

En el trabajo seguimos un esquema clásico, en él se ve claramente diferenciado un primer bloque con la normativa aplicable y los diferentes tipos y partes del contrato, teniendo en cuenta la especificidad del objeto y, un segundo bloque, donde se estudian tanto la documentación del contrato, cuestión importante al plantearnos un contrato de estas características; las diferentes obligaciones de las partes; y las diferentes especialidades en la responsabilidad de las partes con relación al régimen general del contrato de transporte.

II. MARCO JURÍDICO APLICABLE

1. LA REGULACIÓN ANTERIOR A LA LEY DE CONTRATOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS

En primer lugar, se debe hacer una referencia al contrato de mudanza como una realidad habitual en la práctica y repasar la regulación anterior. Este contrato se incluyó en la vigente Ley 15/2009, de 11 de noviembre, de Contrato de Transportes Terrestres

de Mercancías, como una modalidad específica del contrato de transportes terrestres, debido al número de asuntos jurisprudenciales que ocasionaba en la práctica.

En cuanto a la ausencia de regulación anterior, podemos decir que el contrato de mudanza constituía en nuestro Derecho un contrato atípico y daba lugar a diferentes interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales sin existir un acuerdo unánime en cuanto a su naturaleza jurídica y, consiguientemente, a su régimen aplicable. De ahí su inclusión en la nueva Ley cuyo primer artículo dedicado al tema establece el contrato de mudanza como una pluralidad de prestaciones. No es pues, un contrato simple sino que exige un pormenorizado estudio debido a la variedad de servicios que incluye. Entre las prestaciones exigidas al porteador recogidas en el art. 71 LCTTM podemos citar el transporte, la carga y descarga de mercancía, estiba y desestiba, desmontaje y montaje, colocación en el lugar de destino, etc. Todas ellas incluidas en las obligaciones del porteador que nos llevan a considerar el contrato de mudanza como un contrato de carácter complejo.

Antes de que entrara en vigor la regulación nueva de la Ley, en lo referente a la calificación de este tipo de contrato, había dos posturas contrapuestas:

Por un lado, teníamos la vertiente jurisprudencial que afirmaba que no eran de aplicación las normas reguladoras del contrato de transporte del propio Código de Comercio, calificando el contrato como un contrato mercantil y atípico, siendo una modalidad de arrendamiento de obra. Esta postura venía a decir que como la empresa de mudanza se obligaba a un resultado, la calificación de todas las prestaciones que esta asumía se podían incluir en una modalidad de arrendamiento de obra. Por todo ello, se les aplicaban las disposiciones del Código Civil sobre el contrato de arrendamiento de obra. Lo que ocurría entonces era que, al no contar con un plazo de prescripción específico para dicho contrato, se acogían al plazo de prescripción general que recogía el mismo Código Civil, de 15 años, que era excesivamente largo para el tipo de obligaciones derivadas del presente contrato que estudiamos. Este plazo ha sido modificado en el momento presente², como bien se recoge en el art. 1964 del Código

² Por la Disposición final primera de la Ley 42/2015, de 5 de octubre de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Civil, en el que se otorga un plazo de prescripción de cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación³.

La otra vertiente contrapuesta manifestaba que el contrato de mudanza, según su naturaleza de transporte, se regulaba por el Código de Comercio en el art. 349 siendo un contrato mercantil y rigiendo las reglas de prescripción de un año del art. 952.2 Cco, en lo referente a los casos de pérdida o avería de las mercancías. Debemos tener en cuenta que si el contrato de mudanza no hubiera tenido valor como un contrato de transporte, las Juntas Arbitrales de Transporte⁴ no habrían sido consideradas competentes para resolver las controversias planteadas por las partes.

Estas juntas han tenido una postura unánime respecto a la aplicación de las normas del transporte en estos supuestos. Tanto en los de pérdidas o daños a los bienes objeto del transporte como en los plazos de prescripción de las acciones han utilizado el Código de Comercio y la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Es decir, han usado el plazo de prescripción de un año, salvo en reclamaciones por impago de portes para las que el plazo era de seis meses⁵.

Además, la cualidad de contrato de transporte también ha sido utilizada en las cláusulas de los contratos tipo de las empresas españolas; por ejemplo, fue empleado por la Federación Española de Empresas de Mudanzas de la que hablaremos más adelante.

Dentro de esta postura existe otra más congruente que recoge el contrato de mudanza, no como un simple puro contrato de transporte, sino como un contrato complejo integrado por una pluralidad de prestaciones no limitadas al transporte de

³ SAP de Las Palmas (Sección 3ª.), Sentencia núm. 603/2004, de 30 de noviembre, JUR/2005/48029; SAP de Las Palmas (Sección 3ª.), Sentencia núm. 588/2005, de 5 de diciembre, JUR/2006/65553; SAP de Málaga (Sección 6ª.), Sentencia núm. 106/2011, de 18 de febrero, JUR/2011/342967; SAP de Pontevedra, (Sección 6ª.), Sentencia núm. 634/2012, de 09 de diciembre, JUR/634/2012.

⁴ Las Juntas Arbitrales de Transporte se crearon para resolver reclamaciones de carácter mercantil en relación con el cumplimiento de los contratos de transporte terrestre y de actividades auxiliares y complementarias del transporte. Existen en todas las CCAA y en Ceuta y Melilla.

Antes de que se inicie o debiera haberse iniciado conforme a lo pactado la realización del servicio contratado, las Juntas Arbitrales son las únicas competentes para resolver este tipo de reclamaciones. La controversia no puede exceder de 15.000 euros y sin oposición de partes.

Si excediera de 15.000 euros, es necesario que las partes intervinientes, de común acuerdo, sometan a su conocimiento la controversia.

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_TERRESTRE/SERVICIOS_TRANSPORTISTA/JUNTAS_ARBITRALES/, 5 de octubre de 2017.

⁵ SAP Madrid 214/2012, de 6 de julio, JUR/2012/34588. en referencia al plazo semestral que se aplica en los impagos de de portes. JUR/2012/34588

objetos y enseres de un lugar a otro. Indica que no resulta de aplicabilidad el plazo del art. 951 Cco sino el general del art. 1964 CC de 15 años. Así lo había estimado la sentencia SAP Santa Cruz de Tenerife (Sección 1.ª), núm. 348/2008, de 28 de julio, que indica que «tiene elementos de transporte pero también de comisionista [...] no se circunscribe y limita a la realización por la recurrente de un transporte de objetos y enseres de un lugar a otro [...] por lo que debe entenderse [...] como un contrato complejo integrado por una pluralidad de prestaciones [...] no limitadas al transporte de objetos.⁶

2. RÉGIMEN JURÍDICO ACTUAL

Respecto a la regulación actual, el legislador no ha querido dejar tanto margen discrecional en su regulación y se han elaborado una serie de preceptos incluidos en el Capítulo VIII de la LCTTM. Es frecuente encontrarnos este tipo de contrato en la práctica siendo importante destacar la multitud de reclamaciones con las que nos podemos encontrar debido a las especiales obligaciones del porteador, que no sólo se dedica al transporte de la mercancía, sino que además conlleva unas obligaciones accesorias determinadas y una especificidad en el objeto transportado: mobiliario, enseres, ajuar doméstico, etc. Aún así, se ha optado por incluirlos en el ámbito de aplicación del transporte pero estableciendo una serie de preceptos especiales como se deduce de la Exposición de Motivos de la LCTTM: «la regulación del contrato de mudanza como transporte que recae sobre un objeto especial y que conlleva unas obligaciones accesorias igualmente especiales».

Normalmente el contrato de mudanza es un contrato realizado con consumidores, en consecuencia conlleva unas obligaciones previas que se pueden deducir del régimen especial. Estas son: la obligación de un presupuesto previo (artículo 73.1 LCTTM), la obligación de dar información sobre los seguros de daños que el cliente puede solicitar (art. 74.4 LCTTM) o, la obligación de informar al cargador acerca de las normas administrativas que sean aplicables (art. 74.3 LCTTM)

⁶ SAP de Santa Cruz de Tenerife (Sección 1.ª) núm 348/2008, de 28 de julio. cit. por PETIT LAVALL, M V., «El contrato de mudanza en la LCTTM», *Revista de derecho del transporte: Terrestre, marítimo, aéreo y multimodal*, nº6, 2010, p. 346

En consecuencia, podemos decir que en la mayor parte de los casos, y atendiendo a la naturaleza de una de las partes, el cargador, el contrato de mudanza es un contrato de consumo. Por tanto, serán también aplicables, junto con la normativa de transporte, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación, y el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y demás leyes complementarias.

En referencia a la LCGC, se aplica a todo contrato en el que existan condiciones generales, celebrado entre un profesional y cualquier persona física o jurídica (art. 2), sin estar los contratos a los que nos referimos excluidos por el art. 4 de la misma Ley, (los contratos administrativos, contratos de trabajo, los de constitución de sociedades, los que regulan relaciones familiares y a los contratos sucesorios). Además, serán nulas de pleno derecho todas las cláusulas que contradigan en perjuicio del consumidor lo que digan las normas imperativas y cuando puedan ser consideradas, de acuerdo con los arts. 82 y ss de la LGDCU, cláusulas abusivas.

Atendiendo al art. 3 de la LGDCU son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un interés ajeno a su actividad comercial, empresarial o conforme a su oficio o profesión y las personas jurídicas que actúen sin ánimo de lucro en ámbitos ajenos a una actividad empresarial o comercial.

Los derechos básicos se encuentran regulados en el art. 8 LGDCU, y en el caso de la mudanza, sobre todo, nos afectan: el derecho a que la información suministrada a los consumidores sea nítida y veraz; la indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos en caso de pérdida o avería de los bienes; la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, en especial, la no inclusión de cláusulas abusivas en los contratos y la protección de sus derechos en los procedimientos (derecho a la no indefensión).

Es de destacar la aplicación del art. 60 LGDCU en este tipo de contratos, el empresario (en este caso el porteador), quedará obligado a facilitar al consumidor o usuario, de forma clara y comprensible la información relevante, veraz y suficiente respecto a las condiciones jurídicas y económicas presentes en el contrato.

III. CONCEPTO

Se establece el concepto de contrato de mudanza en el art. 71 LCTTM como aquel en el que *el porteador se obliga a transportar mobiliario, ajuar doméstico, enseres y sus complementos procedentes o con destino a viviendas, locales de negocios o centros de trabajo, además de realizar las operaciones de carga, descarga y traslado de los objetos a transportar desde donde se encuentren hasta situarlos en la vivienda, local o centro de trabajo de destino. El resto de las operaciones, como la preparación, armado o desarmado, embalaje, desembalaje y otras complementarias, quedarán a la voluntad contractual de las partes contratantes.*

El objeto del contrato de mudanza es la obligación principal que comprende el transporte, la carga y descarga y junto a ellas encontraríamos otras obligaciones accesorias, como pueden ser el armado y desarmado, embalaje y desembalaje de determinados bienes (mobiliario, ajuar doméstico, enseres y complementos) que deben ser puestos en el contrato de la mudanza como cláusulas adicionales, con lo cual habría que examinar caso por caso el contenido del contrato como se deduce del art. 71 LCTTM que indica que: *El resto de las operaciones [...] quedarán a la voluntad de las partes contratantes.* Por todo esto, decimos que la mudanza no solo incluye el transporte, sino además todas las actuaciones para la colocación e instalación de estos bienes en el lugar designado por el cargador si se han pactado. En cuanto a la colocación de los bienes, según la jurisprudencia los bienes deben colocarse en el lugar concreto designado por el cargador «no siendo razonable dentro del normal contenido obligación del contrato de mudanza que los enseres porteados se dejen a pie de calle»⁷. Es decir, constituye un incumplimiento contractual dejar los enseres junto a la vivienda, en los pasillos de acceso o a pie de calle.

Respecto a la definición contenida en la LCTTM podemos destacar que no hay ningún tipo de referencia expresa a la actividad de depósito o guardamuebles⁸ aunque esta actividad en la práctica normalmente se lleva a cabo por la misma empresa o porteador y se encuentra recogida en el documento de contratación o bien, la

⁷ SAP Barcelona (Sección 1ª.), Sentencia núm. 458/2004, de 19 de mayo, JUR/2004/27789

⁸ SAP de Madrid, (Sección 21ª), Sentencia núm. 77/2010, de 23 de febrero, JUR/28079370212010100076; Sentencia que hace referencia a los daños ocasionados por el depósito de un guardamuebles.

subcontrata con otra empresa. Existe jurisprudencia contradictoria⁹ que se ha pronunciado a favor de regular esta operación de guardar la mercancía a través de un contrato de depósito de mercancías aunque cabe resaltar que con carácter residual se aplica el art. 71 LCTTM, el contrato de mudanza estará sometido por las normas de transporte mientras no se opongan a su regulación específica del Capítulo VIII. Por tanto, es operativo en este caso el art. 28 LCTTM que obliga al porteador a guardar y conservar las mercancías objeto del transporte desde que las recibe en origen hasta su entrega al destinatario.

Alguna norma de rango inferior y de carácter administrativo establece una definición más precisa de mudanza. Tenemos la de la Comunidad de Madrid de 2005¹⁰ en su art. 3 define la mudanza como: *traslado o acarreo, entre viviendas, locales u oficinas, en el interior de una población o entre distintas localidades del país o con el extranjero, utilizando uno o varios modos de transporte, de mobiliario, sus complementos, ajuar doméstico y otros enseres domésticos, incluyendo prestaciones accesorias propias de este tipo especial de transporte.* y además también define las prestaciones accesorias entendiéndolas como *todas aquellas que sean complementarias de la obligación de traslado de bienes y enseres, con su carga y estiba a bordo del vehículo, que asume el transportista en la mudanza. Tendrán, en todo caso, la consideración de prestaciones accesorias el montaje y desmontaje de muebles y enseres, las operaciones de preparación, embalaje y desembalaje de enseres y la contratación de seguros.*

En esencia podemos concluir que tanto la ley estatal como la Orden mencionada de la Comunidad de Madrid de 2005, dicen lo mismo.

1. TIPOS.

Se incluye todo tipo de mudanza, tanto la doméstica (con destino a viviendas) como la mudanza empresarial o profesional (con destino a locales de negocio o centros de trabajo). Y además aunque no se deduce de la misma LCTTM, desde el punto de vista

⁹ SAP Badajoz (Sección 1.ª), de 26 de abril de 2001, JUR 2001/173043; SAP Santa Cruz de Tenerife (Sección 1.ª), de 21 de abril de 2006, JUR 2006/188724; SAP Alicante (Sección 6.ª), de 6 de agosto de 2008, JUR 2008/271820; SAP Madrid (Sección 12.ª), de 25 de enero de 2007, JUR 2007/157129. Cit. Por PETIT LAVALL, M V., «El contrato de mudanza en la LCTTM», *Revista de derecho del transporte: Terrestre, marítimo, aéreo y multimodal*, nº6, 2010, p.350

¹⁰ ORDEN de 11 de noviembre de 2005, de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que se regula la creación de un Registro de Empresas de Mudanzas, se establece un logotipo para las empresas inscritas y se aprueba un contrato-tipo de mudanzas.

operativo, tenemos que tener en cuenta que la mudanza podrá ser de varios tipos¹¹ dependiendo del recorrido a realizar por la empresa de mudanzas:

En primer lugar tenemos las mudanzas locales, suelen ser sencillas y se realizan dentro de la misma población.

Las mudanzas nacionales, en las cuáles la complicación es mayor porque entran en juego dos ciudades distintas con normativas distintas y una mayor complicación en los permisos¹².

Y por último, tenemos las mudanzas internacionales, que son evidentemente las más complicadas, por la distancia existente y porque además exigen una mayor documentación en el traslado y dependen del país destino o del país origen y de su regulación. Además hay que pagar las oportunas tasas aduaneras, se recomienda contactar con la embajada extranjera y debido a su grado de complejidad, se realiza por diferentes medios (según sea transporte terrestre, marítimo o aéreo)¹³. La mayor parte de los conflictos jurisprudenciales suelen producirse por este último tipo de mudanzas debido a la mayor distancia y complicación en el traslado de la mudanza¹⁴.

2. LAS PARTES CONTRATANTES

De los preceptos del Capítulo VIII de la LCTTM, se extraen los sujetos intervinientes del contrato que en este caso son los mismos que cualquier contrato de transporte: el porteador, el cargador y el destinatario.

El porteador está regulado en el art 4.2 LCTTM que dice que la figura del porteador *es quien asume la obligación de realizar el transporte en nombre propio con independencia de que lo ejecute por sus propios medios o contrate su realización con otros sujetos.*

¹¹ <https://fedem.es/clases-mudanzas/>

¹² SAP de Zaragoza, (Sección 5ª), Sentencia núm. 384/2016, de 8 de julio, JUR/335/2016, caso Gil Stauffer de mudanza a nivel nacional con especialidad, la mudanza se realizaba desde Canarias a Zaragoza.

¹³ Actualmente la mayor parte de estas empresas se encuentran inscritas en la FEDEM (Federación Española de Empresas de Mudanzas), aquí en Aragón se encuentra la FETRAZ (Federación de Empresas de Transporte de Mercancías de Zaragoza).

¹⁴ SAP de Asturias, (Sección 6ª), Sentencia núm. 210/2008, de 25 de julio, JUR/3304437006; ejemplo de complicaciones en un traslado de mudanza donde se traslada el mobiliario y enseres en una ciudad distinta de la pactada expresamente en contrato.

El porteador es una de las partes que se obligan en la contratación, es quien asume la obligación de realizar el transporte. En este sentido, el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en su art. 22 precisa que: *Únicamente podrá contratar la realización de servicios de transporte terrestre de mercancías en concepto de porteador, y emitir facturas en nombre propio por su prestación, quien previamente sea titular de una licencia o autorización que habilite para realizar transportes de esta clase o, en otro caso, de una autorización de operador de transporte de mercancías.* Esto quiere decir, que el propio porteador para llevar a cabo todo tipo de prestaciones tiene que contar con la oportuna licencia o autorización que le conceda la realización de transportes de este tipo.

El cargador, según el art. 4.1 LCTTM *es quien contrata en nombre propio la realización de un transporte y frente al cual el porteador se obliga a efectuarlo.*

Es una persona física o jurídica que, ya sea directamente o como intermediario del transporte, solicita la realización del transporte en nombre propio y frente a la cual el porteador asume, en virtud de un contrato, la obligación de efectuarlo.

El destinatario es la persona a quien el porteador debe entregar la mercancía en el lugar del destino. Se encuentra definido en el art 4.3 LCTTM. Normalmente en este tipo especial de contrato de transporte esta figura suele coincidir con la del cargador (art 71 LCTTM).

Habitualmente son consumidores aunque también pueden ser profesionales o empresarios.

Asimismo, también encontramos casos en los que la contratación la ha realizado un organismo público, a través de un concurso de licitación que concede a determinadas empresas la asunción de determinadas tareas públicas (traslado, organización y preparación en determinados edificios públicos)¹⁵.

¹⁵ Por ejemplo, anuncios de licitación que promueve el Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón. RE 071/2013, Acuerdo 57/2013, de 7 de octubre de 2013, del Tribunal

IV. LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO

Se encuentra regulada en el art. 73 LCTTM, bajo el mismo título y contiene tres apartados.

En primer lugar, se establece la obligación del porteador de presentar un presupuesto previo. Por otro lado, aborda otro tipo de documentación relativa al contrato de mudanza que, en algunos casos, puede resultar de vital importancia, y es el inventario que contendrá los objetos que se pretende transportar. Por último, en el tercer apartado aparece la posibilidad de que las partes puedan exigirse la realización y aceptación de un inventario de los bienes a transportar y señala el supuesto en que alguna de las partes se negase a realizar o aceptar un inventario, y las consecuencias que derivarían de ello a efectos de la LCTTM.

1. LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR UN PRESUPUESTO

El presupuesto surge como documentación necesaria en la práctica. La mayor parte de reclamaciones tienen su origen en la falta de documentación, sobre todo en lo que se refiere al precio pactado como contraprestación al servicio de mudanza. Incluso muchas reclamaciones que se presentan ante las Juntas Arbitrales de Transporte se fundamentan en que el precio exigido tras la finalización del servicio era considerablemente más elevado que el precio pactado inicialmente. De ahí surgió que el legislador optará, acertadamente, por aumentar la seguridad jurídica en lo que se refiere al pacto de los precios, exigiéndole al porteador la presentación de un presupuesto previo antes de comenzar la mudanza, o incluso antes de celebrar el contrato.

Teniendo en cuenta que la mayor parte de los cargadores son consumidores y para incrementar la seguridad jurídica y evitar discrepancias entre las partes, la presentación por parte del porteador de un presupuesto al cargador constituye una obligación precontractual.

Bien es cierto que, el hecho de que el porteador esté obligado a presentar dicho presupuesto, no significa que el contrato de mudanza tenga carácter formal, es decir, al igual que el contrato de transporte es un contrato consensual, decidido o adoptado por acuerdo entre las partes. Por lo cual, si las partes pactaran expresamente la no exigencia de un presupuesto previo y el porteador no lo presentara, no habría en principio incumplimiento del contrato.

Ahora bien, si el porteador no presenta el presupuesto exigido legalmente y surgieran controversias relativas a cualquier aspecto que se debiera haberse incluido en el mismo, al carecerse de este documento probatorio, será necesario acudir a otros medios de prueba en caso de desacuerdo sobre cuestiones que debían haber estado incluidas: obligaciones accesorias no ejecutadas pero asumidas, costes incluidos¹⁶.

El presupuesto debe ser presentado por escrito y deben constar los servicios que se vayan a prestar, es decir, las obligaciones que asuma el porteador, sobre todo las accesorias según el art. 71 LCTTM, el coste del presupuesto y el coste total de la mudanza especificando gastos adicionales como pueden ser los gastos que se generen tras los trámites administrativos o permisos que resulten necesarios.

La finalidad del contenido del presupuesto, es, por un lado, que el cargador sepa con exactitud y claridad cuál va a ser el precio total que debe pagar, ya que es una razón de peso en la multitud de controversias que nos podemos encontrar en la práctica; y por otro lado, que los servicios y obligaciones asumidas por el porteador queden documentadas en el presupuesto para futuras referencias. Por lo tanto, aunque el presupuesto presentado por el porteador en principio sólo representa una oferta de condiciones que éste le hace al cargador, una vez aceptado, pasa a formar parte como prueba documental de las condiciones pactadas para la realización de la mudanza.

En lo referente al coste del presupuesto así como su elaboración a cambio de un precio, podemos distinguir cuando la mudanza es contratada por un consumidor y cuando la mudanza es contratada por un no consumidor.

Hay que tener presente que el coste de elaboración del presupuesto al cargador sólo podrá aplicarse cuando en el contrato éste mismo no sea un consumidor. La

¹⁶ PETIT LAVALL, M V., «El contrato de mudanza en la LCTTM», *Revista de derecho del transporte: Terrestre, marítimo, aéreo y multimodal*, nº6, 2010, p.352.

elaboración del presupuesto conlleva al porteador una serie de gastos y servicios adicionales (analizar e identificar los objetos a transportar, hacer una selección del material o de las instalaciones que le harán falta para ejecutar la mudanza, etc.), que requieren un esfuerzo y tienen un precio.

En cambio, cuando el cargador sea un consumidor, será de aplicación el art. 60 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. En el art. 60.3 LGDCU establece que la información proporcionada sobre el precio y, en este caso, el presupuesto, debe suministrarse de forma gratuita, la información dada debe ser veraz y suficiente sobre los elementos esenciales del contrato, sobre sus condiciones jurídicas y económicas.

Cuando el contrato se realiza con consumidores, tenemos que poner de especial relieve en una cualidad diferenciadora y es que se debe respetar el nivel mínimo de protección de esta LGDCU (art. 59), ya que, además, es de aplicación preferente sobre la legislación civil y mercantil propia de los contratos.

Por todo ello, podemos calificar el presupuesto en la mudanza como una oferta de condiciones del contrato que se realiza al cargador.

Además, el presupuesto, aunque es obligatorio, no se puede decir que convierta al contrato en un contrato formal (sino consensual). Eso sí, cuando el cargador lo acepta hará prueba de la existencia y contenido del presupuesto, es decir, actúa como medio de prueba en caso de desacuerdo o incumplimiento del contrato. La falta del mismo no significa que el contrato no sea válido sino que éste sigue siendo consensual y cumple efectos plenamente, según se recoge en los arts. 1278 y 1279 del Código Civil. Si el porteador no cumple con su obligación legal de elaborar y entregar el presupuesto habrá consecuencias que expondremos más adelante. En cuanto a la prueba, habría que acudir a otros medios probatorios en caso de disconformidades (costes incluidos, obligaciones accesorias no ejecutadas pero asumidas, etc.) entre las partes. Estos medios probatorios se encuentran regulados en el art. 299 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil¹⁷.

¹⁷ Art. 299 de la LEC cita como medios probatorios el interrogatorio de las partes y de los testigos, declaraciones de peritos en sus dictámenes o su presentación, reconocimiento judicial y reproducción ante

También se encuentra regulado en la Orden de la Comunidad de Madrid de 2005 en su art. 5 apartado A) que exige, como requisitos para la inscripción en el Registro: *presentar al cliente, previamente a la realización de la mudanza, un presupuesto por escrito del coste de la misma y formalizar, con anterioridad a la ejecución de la misma, un contrato escrito con el cliente. El presupuesto deberá fijar con claridad el precio de los distintos servicios que se prestan, el IVA y el precio total, aclarando qué prestaciones accesorias se van a realizar. En el presupuesto se especificará si el servicio se prestará con vehículos capitoné o con otra clase de vehículos. Realizar un inventario de los bienes objeto del transporte, elaborado por la empresa transportista o, en su caso, por el cliente, si bien, en este supuesto, deberá estar firmado y sellado por la empresa transportista;* y en el Código de buenas prácticas del sector de mudanzas y guardamuebles de la misma comunidad. En el cual, se encuentra regulada la documentación que los servicios o empresas de mudanzas deben proporcionar, además de forma cierta y objetiva, con una información veraz, eficaz y suficiente a sus clientes y usuarios. Deben trasladar el precio completo o presupuesto, y las condiciones jurídicas y económicas para la utilización del servicio, además de los costes adicionales. Por último, concluye que si la mercancía se dejara depositada en un guardamuebles hay que hacer un inventario previo.

2. EL INVENTARIO

En cuanto a la realización del inventario, la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, incorpora en su articulado la posibilidad de que cualquiera de las partes (porteador, cargador,...) exija a la otra la incorporación y aceptación de un inventario de los bienes objeto de la mudanza. El inventario es un documento ante todo descriptivo de los bienes que han de ser objeto de la mudanza. No es obligatorio sino exigible por las partes, ya que su coste de realización puede resultar muy elevado. En este sentido, se reproduce, en el art. 73.3 LCTTM en el tenor literal del art. 10.6 LCTTM, en el cual establece que la no realización o aceptación del inventario por la parte requerida a ello, tendrá como posibilidad que la contraparte pueda entender que se ha desistido del contrato.

el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes.

Es recomendable llevar a cabo un inventario para una mayor garantía de las partes ya que, además, sirve como prueba¹⁸.

Además se encuentra regulado en la Orden de la Comunidad de Madrid de 2005 en su art. 5 apartado B) que exige, como requisitos para la inscripción en el Registro: *realizar un inventario de los bienes objeto del transporte, elaborado por la empresa transportista o, en su caso, por el cliente, si bien, en este supuesto, deberá estar firmado y sellado por la empresa transportista.* y en el Código de buenas prácticas del sector de mudanzas y guardamuebles de la misma comunidad. En el mismo Código, se indica que el seguro de responsabilidad civil que cubra las contingencias que puedan surgir en el desarrollo de la actividad se considera uno de los compromisos de actuación de las partes y totalmente imprescindible para realizar la mudanza, es decir, es obligatorio. Unos de los datos que deben quedar recogidos en el contrato debe ser la naturaleza y volumen de los bienes a transportar haciendo un inventario de los mismos. Por lo tanto, el código de buenas prácticas también hace alusión a la necesidad de un inventario previo de los bienes objeto de la mudanza. También, si la mercancía se dejara depositada en un guardamuebles hay que realizar un inventario previo, respondiendo la empresa guardamuebles de la entrega de los bienes.

3. CONSECUENCIAS DE LA NO REALIZACIÓN O APROBACIÓN DEL INVENTARIO

El inventario no es un documento obligatorio pero si exigible por las partes, si la otra parte se niega a realizar o aceptar el inventario la otra podrá entenderla como desistida del contrato y en su caso, se le aplicarán los art. 18.2 y 19.1 LCTTM.

El art. 10.6 LCTTM dice que *cuando la parte contratante requerida a formalizar la carta de porte se negase a ello, la otra podrá considerarla desistida del contrato, con los efectos que, en su caso, correspondan de conformidad con lo*

¹⁸ Como ejemplos señalamos la SAP de Madrid 148/2012, de 14 de mayo, que cita el inventario: «lo que justifica en base al documento núm. 35 acompañado a la demanda, un resguardo de inventario de la mercancía depositada en los almacenes...» como documento con actividad probatoria; la SAP de Madrid Nº 164/2016, Rec 223/2014 lo cita en los fundamentos de la apelación: «Como núcleo de su discurso, el apelante señala que el tenor de la condición general 12ª del presupuesto que firmó no proporcionaba la información suficiente para poder conocer el alcance y consecuencias de concertar o no el seguro que se le ofrecía, señalando como prueba de ello la cortedad del inventario firmado por esta parte...».

dispuesto en los artículos 18.2 y 19.1. En este caso, una parte se niega a realizar o aceptar la carta de porte tal como ocurre en el art. 73.3 LCTTM con el inventario, las consecuencias serán las contenidas en los arts. 18.2 y 19.1 de la misma ley entendiendo la negación del inventario como un incumplimiento contractual. Es decir, la ley se limita a reproducir el mismo tenor del art. 10.6 y aplica las mismas consecuencias que se prevén en el contrato de transporte en general cuando el porteador no pone el vehículo a disposición del cargador conforme a lo convenido o cuando el cargador no entrega la mercancía para el transporte.

En principio y con habitualidad la elaboración de inventario corresponde al cargador que es quien conoce los bienes y enseres objeto del contrato de mudanza y, por consiguiente, el que debiera aceptar el inventario es el porteador. Si el porteador se niega a aceptar el inventario y siguiendo el mismo tenor del art. 18.1 LCTTM el cargador podrá considerarlo por desistido del contrato quedando liberado de las obligaciones que le incumben y además podrá exigir la oportuna indemnización por daños y perjuicios. El desistimiento del inventario del art. 73.3 LCTTM hay que entenderlo como renuncia a la celebración del contrato frente a la del art. 18.1 LCTTM, que recoge la del desistimiento mediando justa causa.

Por otro lado, si es el cargador el que se niega a elaborar el inventario o aceptarlo, será el porteador el que entenderá que aquél ha desistido del contrato y el cargador quedará obligado a pagar al porteador el precio del transporte o encargarle otro de similares características, así como establece el art. 19.1 LCTTM: *El cargador deberá entregar las mercancías al porteador en el lugar y en el tiempo pactados. En caso de incumplimiento, el cargador le indemnizará en cuantía equivalente al precio del transporte previsto, o bien le ofrecerá la realización de un transporte de similares características que se encuentre inmediatamente disponible.* Esta norma se establece para facilitar el trabajo del porteador que necesita conocer el número de bienes y enseres a transportar, ya que dependerá del volumen y de las características de los bienes transportados para poder obtener los correspondientes permisos o licencias administrativas necesarias y, además, poner a disposición del cargador un vehículo apropiado para el transporte de los mismos. Es peculiar y resulta especialmente gravosa la sanción que se le pone al cargador ya que no se le causa el mismo perjuicio al porteador, quien al no disponer de un inventario de los bienes ni siquiera ha procedido a la puesta a disposición del vehículo. Pero, sobre todo, teniendo en cuenta que la

confección del inventario es, junto al presupuesto, una obligación precontractual, previa a la conclusión del contrato y por lo tanto, no es un incumplimiento contractual.

V. LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1. OBLIGACIONES DEL PORTEADOR

En las obligaciones del porteador, tenemos que resaltar las obligaciones comunes de todo porteador que están detalladas en el art. 28 LCTTM y que son la custodia y el transporte. El porteador está obligado a guardar y conservar los bienes y enseres objeto de la mudanza desde que los recibe hasta que los entrega en el destino pactado. Asimismo, el porteador también asume la conducción de esos bienes y enseres objeto del contrato de mudanza hasta su recepción por el cargador/destinatario, además se realiza por la ruta pactada y en su defecto, por la más adecuada atendiendo a las características de los bienes transportados. Además añade el art. 28.3 LCTTM, que el porteador estará obligado a cumplir las demás prestaciones que se hayan concretado en el contrato con motivo u ocasión del transporte, en los términos y condiciones pactados; prestaciones complementarias o accesorias que deben respetar la regulación específica de la mudanza recogida en el Capítulo VIII de la misma ley anteriormente señalado.

Otras obligaciones específicas de la mudanza son la presentación de un presupuesto previo (art. 73.1 LCTTM, antes ya mencionado), y las operaciones de carga y descarga y el deber de información recogidas en el art. 74 LCTTM.

1.1 Obligaciones de Carga y Descarga

Pasamos a analizar primeramente la obligación de realizar las operaciones de carga y descarga por parte del porteador. A diferencia de lo que ocurre en el contrato de transporte general (art 20.1), la LCTTM en su art. 74.1 establece que las operaciones de carga y descarga corresponden al porteador salvo que expresamente se haya pactado lo contrario. En el concepto literal del precepto se señala que *las operaciones de carga y descarga, salvo que expresamente se pacte lo contrario, serán de cuenta del porteador. En los mismos términos, estará obligado a armar, desarmar, embalar, desembalar y colocar en el lugar que se le indique los bienes objeto de la mudanza.* Pues bien, esto quiere decir que si no se ha pactado lo contrario la realización de todas estas

operaciones o acciones corresponden al porteador. Además, del propio concepto de mudanza se puede extraer que todo tipo de operaciones análogas, como pueden ser, la estiba o desestiba o el acondicionamiento de los bienes y enseres, son competencia del porteador.

En consecuencia, entendemos que la carga y descarga, estiba y desestiba y el acondicionamiento de los bienes y enseres que sean objeto de la mudanza son a cargo del porteador con carácter imperativo mientras que otro tipo de operaciones (armado y desarmado, embalaje y desembalaje y colocación de los bienes objeto de la mudanza en el lugar propio que se haya pactado con el destinatario/cargador) corresponderá a la voluntad dispositiva de las partes, se realizará conforme a esa voluntad y debe especificarse en las condiciones particulares de cada contrato, estableciendo el coste en el presupuesto previo.

Además el hecho de que el porteador asuma una pluralidad de prestaciones diferentes del transporte, esto es, la complejidad del contrato, es una causa importante para que en la Ley (LCTTM) se haya separado a las mudanzas de las normas de contrato de transporte¹⁹, tal como se ha indicado en el punto II de este trabajo.

Parece adecuado que la obligación recaiga específicamente sobre el porteador puesto que generalmente será quien mejor conozca las características del medio de transporte utilizado, las condiciones del mismo y que además, generalmente, el contrato se realiza con consumidores (como ya hemos comentado tienen unas garantías y derechos regulados en la LGDCU). No obstante, prima la libertad de las partes de pactar algo diferente a lo dispuesto legalmente aunque esta responsabilidad sea limitada, ya que deberán elaborar el pacto con anterioridad a la efectiva realización de la mudanza.

1.2 La obligación de información

La obligación de información se recoge en los apartados tercero y cuarto del art. 74 LCTTM. El porteador tiene la obligación de suministrar toda la información necesaria al cargador tanto de la normativa administrativa que será de aplicación en la

¹⁹ PETIT LAVALL, M V., «El contrato de mudanza en la LCTTM», *Revista de derecho del transporte: Terrestre, marítimo, aéreo y multimodal*, nº6, 2010, p.355.

mudanza o traslado y la información de la posibilidad de contratar un seguro de daños por parte del cargador²⁰.

Existen diferencias significativas con el contrato de transporte general de mercancía y el deber de información y documentación regulado en el art. 23.1 LCTTM frente al art. 74.3 LCTTM que estamos analizando. Sobre todo, y más importante, hay que tener presente que los contratos de mudanza se suelen realizar con consumidores, por tanto, el cargador suele ser un consumidor que normalmente no conoce de la normativa aplicable ni de la ejecución de este tipo de contratos. A diferencia del porteador que sí que tiene una especialización más que evidente en el traslado de bienes y enseres, por lo general van a ser empresas de mudanza especializadas en el sector, y por consecuencia, tiene el deber de conocer la normativa aplicable. Es decir, a diferencia de los contratos de transporte de mercancía en los cuales, el cargador es el encargado de suministrar toda la documentación e información al porteador para la ejecución del transporte; en el contrato de mudanza es el porteador el que, conocedor de las normas y trámites administrativos necesarios para el desarrollo del contrato, facilita al cargador esta misma información como deber legal²¹.

Además, como ocurre en el art. 23.2 LCTTM, se prevé en el art. 74.3 LCTTM que el porteador está obligado a informar al cargador acerca de las normas administrativas que sean aplicables al traslado que tiene lugar con motivo del contrato, pero no está obligado a comprobar si los documentos puestos a su disposición son correctos y completos.

Los preceptos especiales del contrato de mudanza en lo referente al régimen de información y documentación deben completarse con el régimen más completo del art. 23 LCTTM, proveniente del art. 11 del Convenio de Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, Ginebra el 19 de mayo de 1956; en correspondencia con el art. 72 LCTTM que dice que: *El contrato de mudanza estará sometido a las normas aplicables al modo de transporte que se utilice en cuanto no se opongan a lo establecido en este capítulo*. Es decir, mientras no contravenga lo establecido en el Capítulo VIII referente al contrato específico de mudanza, la

²⁰ SAP de Madrid, (Sección 28ª), Sentencia núm. 164/2016, de 28 de abril, JUR/223/2014.

²¹ SAP de Barcelona (Sección 1ª.), Sentencia núm. 343/2013, de 8 de julio, JUR/2013/329266. Referente al derecho de información determinando las consecuencias de la no aplicación de dicha obligación.

normativa aplicable en este tipo de acuerdos será la que rige los contratos de transporte dependiendo de la modalidad utilizada. Por lo cual, debemos remitirnos al art. 23 LCTTM que establece la responsabilidad de las partes en caso de ausencia, insuficiencia o irregularidad de los documentos e informaciones. En el art. 23.1 LCTTM se establece que el cargador debe adjuntar la carta de porte o poner a disposición del porteador la documentación necesaria y los trámites que sean precisos para la realización del transporte y la entrega de la mercancía. El cargador es el responsable de los daños ocasionados por la falta o defectos de la documentación e información pero existe una excepción, y es que esta responsabilidad corresponderá al porteador cuando éste mismo no haya indicado correctamente al porteador cuál es la documentación necesaria. También será responsable el porteador cuando haya habido una pérdida o mala utilización de la documentación por su parte e, incluso, podrá rechazar la mudanza si no se ha expedido por parte del cargador la documentación necesaria para su realización.

Por último, se establece una posibilidad en el art. 74.4 LCTTM que obliga al porteador a facilitar la información al cargador en lo referente a concertar un contrato de seguro de daños sobre el traslado y efecto de los bienes afectos a la mudanza. La finalización del contrato de seguro no libera de responsabilidad al porteador. Del incumplimiento deriva una responsabilidad limitada del porteador que se deduce del mismo precepto indicando que no se aplicará el art. 76 LCTTM cuando el porteador haya incurrido en un incumplimiento del deber de información (en las que se incluye, como decimos, el deber de informar al cargador sobre la contratación del seguro de daños). En cuanto al cargador, sí que es cierto que este tipo de contratos se celebran especialmente con consumidores, pero reiteradamente se ha venido aplicando a todos, tanto a los consumidores como a las empresas y profesionales que realicen este tipo de contratos. La información referente a la posibilidad de concertar el seguro de daños se tiene que suministrar a todos y deben facilitarse todas las condiciones referentes al mismo.

Según ha establecido la jurisprudencia²², el porteador debe informar al cargador sobre la posibilidad de contratar un seguro para cubrir cualquier daño que pueda ocurrir, además, aparte deberá informar también de las condiciones de dicho seguro.

²² La SAP Madrid, Sentencia núm 620/2004, de 22 de octubre,, JUR/2005/17574 señala que: “[...] no cabe duda de que la interesada debió ser informada sobre los riesgos y, en particular, sobre las condiciones del seguro, especialmente el valor de los bienes, [...] lo cual conlleva informar al interesado

En consecuencia, son de aplicación los preceptos incluidos en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro en lo referente a los seguros de responsabilidad civil por daños (arts. 73 y ss) y a los seguros de transportes terrestres (arts. 54 y ss).

El porteador con carácter general suele tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que ofrezca una cobertura de los daños o desperfectos que puedan ocurrir durante el trayecto de la mudanza. El coste de los seguros viene siendo considerado como un gasto de explotación y será por tanto repercutible en las correspondientes tarifas.

El seguro de responsabilidad civil, cubre los desperfectos que puedan ocasionarse en los bienes inmuebles (arañazos en la pared, daños en el ascensor de la vivienda, desperfectos en el suelo, el portal, etc.) aunque en ningún caso cubre las pertenencias personales.

Por otro lado, tenemos el seguro de transporte terrestre, para desperfectos que se puedan ocasionar a la mercancía durante el transporte de un sitio a otro. Este seguro, en la mayoría de los casos tiene un precio habitual de 4,5 €/kg²³, es decir, se suele valorar por kilogramo del bien mueble transportado. Esto en muchas ocasiones es insuficiente ya que no se corresponde el valor del objeto transportado con esta compensación. Por tanto, se suele aplicar también un seguro específico para asegurar los enseres y objetos en base al valor actual del mercado, en vez de hacerlo respecto a su peso.

Por último, a nivel general este tipo de seguros van incluidos en el contrato de mudanza²⁴. Es competencia de la empresa de mudanzas indemnizar al cliente, en el caso de pérdida o deterioro, y con una cantidad que no sea superior al precio del transporte, en el caso de retraso en la entrega de la mercancía. Si los daños son externos y fáciles de visualizar, se deben dejar reflejados en el inventario que el porteador firma con el cargador. Si los daños son de otro tipo y no se reflejan a simple vista tiene veinticuatro horas para reclamar por escrito al porteador.

no sólo de la existencia de un seguro sino también del importe por el que se debe contratar a efectos de no caer en infraseguro, por exigencias de la buena fe”.

²³ Blog Gil Stauffer: grandessoluciones.com, 19 de octubre de 2017.

²⁴ SAP de Asturias (Sección 1ª.), Sentencia núm. 130/2005, de 6 de abril, JUR/2005/99678. Inclusión en un contrato de mudanza de un seguro por daños ocasionado a terceros.

1.3 Deberes administrativos del porteador

En primer lugar, para llevar a cabo el contrato de transporte de mudanza es necesario solicitar una licencia de Ocupación de Vía Pública. Esta licencia se obtiene de la Administración Pública, del Ayuntamiento en el que se va a realizar la mudanza.

La licencia de Ocupación de Vía Pública se concede a ciudadanos y/o entidades públicas o privadas para efectuar la ocupación de una parte concreta de dominio público en calzadas, aceras, plazas, etc., durante un plazo determinado de tiempo y con el fin de realizar una actividad o aprovechamiento propio.

La concesión de esta licencia está sujeta a las limitaciones urbanísticas, de uso, de ámbito o de cualquier otra que los servicios municipales consideren que condiciona la ocupación. El Ayuntamiento puede ordenar su cese cuando lo estime necesario y por causa justificada.

Se reserva un espacio que se situará en la zona más próxima al lugar de realización, donde no se realicen problemas graves al tráfico rodado o a la circulación de peatones. Si no fuera posible realizar la petición, se notificará a la empresa que podrá solicitar el reintegro de las tasas abonadas.

El procedimiento para tramitar la licencia temporal de Ocupación de la Vía Pública consiste en formalizar una solicitud (cada Ayuntamiento tiene un formulario y un tipo de trámites) debiendo realizarse con un mínimo de antelación a la mudanza de cuarenta y ocho horas. En la solicitud es importante especificar la calle y entre qué números se quiere reservar el espacio de la vía pública, ya que la policía local el día anterior a la mudanza coloca unas señales provisionales para la prohibición de aparcar en ese tramo.

Posteriormente, se abona la tasa correspondiente. Esta tasa va en función del número de metros de la vía pública que se vayan a ocupar a consecuencia de la mudanza y la categoría de la calle. Lo habitual es realizar la reserva para medio día o día completo.

En la regulación de una licencia de Ocupación de Vía Pública, tienen mucha importancia las normativas municipales. Cada provincia o municipio ha establecido sus propias reglas para conceder este tipo de permisos o licencias.

La concesión o denegación dependerá de los ayuntamientos, de la categoría fiscal que tenga cada calle, del tiempo de ocupación previsto y de la superficie total ocupada en vía pública.

Como normativa general encontramos la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas que regula el ámbito y competencias de las Administraciones públicas y las normas generales que se deben cumplir en todos los procedimientos.

Además, debemos aplicar el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. En él se recogen y clasifican todos los bienes afectos que son propiedades de las entidades locales. En concreto, en su artículo 3.1 nombra bienes de uso público local como son los caminos, plazas, calles, paseos, parques, etc., y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales con competencia local en referencia a su conservación y protección. En consecuencia, queda claro que el espacio público que se va a utilizar para ejecutar el transporte de la mudanza queda englobado en los bienes públicos propiedad de la entidad local. A partir del art. 74 y siguientes, se recogen los distintos tipos de disfrute y aprovechamiento de los bienes públicos.

La utilización del dominio público podrá ser común o privativa. En el caso que exponemos, estamos hablando de un uso privativo constituido por la ocupación de una porción del dominio público²⁵, de modo que al ejecutar el contrato de mudanza se limita o excluye la utilización por las demás personas transitoriamente en el lugar de realización de la mudanza.

En el caso de la Provincia de Zaragoza, tenemos la inclusión de un permiso que se englobaría dentro de los permisos especiales de ocupación de la vía pública. El Ayuntamiento de Zaragoza concede el permiso con carácter puntual y limitado a un solo día. Además en caso de tener que realizar reserva de espacio en vía pública, la señalización será por cuenta del interesado, en este caso del porteador.

²⁵ Art. 75.2º del mismo Real Decreto 1372/1986, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Por otro lado, respecto a las Tasas, el Real Decreto Legislativo 2/2004 aprobó el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, fijando unas tasas y unos tributos que las haciendas locales pueden imponer en sus territorios.

La Tasa, siguiendo el art. 2.2.a) de la Ley General Tributaria, es el tributo *cuyo hecho imponible es la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado*. El art. 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprobó el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la misma definición, las entidades locales podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, en concreto, art. 20.3.g) *ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, aspillas, andamios y otras instalaciones análogas* y, art. 20.3.h) *entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase*.²⁶

2 OBLIGACIONES DEL CARGADOR/DESTINATARIO

Para una primera aproximación debemos hablar de una obligación principal del cargador; no es otra que el pago del precio de la mudanza, no contenida expresamente en el Capítulo VIII LCTTM. Respecto a su regulación debemos acudir a la regulación general del transporte, en el caso de que el mismo se lleve a cabo por carretera debemos fijarnos en los arts. 37 y ss. LCTTM. El tenor literal del artículo recoge que la obligación del pago del precio del transporte y demás gastos derivados de éste correrá a cargo del cargador cuando no se haya pactado lo contrario. Cuando se haya acordado el precio del transporte y los gastos, el destinatario asumirá dicha obligación cuando acepte las mercancías. En el caso del contrato de mudanza es muy probable que el cargador y el destinatario sean la misma persona física o jurídica, con lo cual

²⁶ En nuestra provincia hay dos tipos, que están reguladas en la Ordenanza Fiscal Nº 25 por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.

estudiaremos que la obligación del pago del precio es asumida en líneas generales por el cargador.

Por otro lado, y siguiendo el art. 38 LCTTM, las variaciones del precio del gasóleo vendrán asumidas también por el cargador/destinatario de la mudanza, salvo que se hubiera pactado otra cosa. Esto deviene cuando el gasóleo aumenta su precio entre el día de celebración del contrato y el momento de realización del transporte. Lo cual vendrá indicado e incrementado en el precio inicial en la factura según las fórmulas y criterios establecidos por la Administración Pública. En caso contrario, el cargador/destinatario podrá pedir una rebaja en el precio, cuando el precio del carburante baje desde el momento de celebración del contrato hasta la fecha efectiva de la mudanza.

Como anteriormente hemos señalado y siguiendo el tenor de la LCTTM, el contrato de mudanza no sólo comporta el transporte, carga y descarga, armado y desarmado sino que es frecuente que la misma integre otras distintas tareas, como son el armado y desarmado, embalaje y desembalaje, etc.

El precio del transporte, carga y descarga, estiba y desestiba, y los gastos exigibles en virtud de este tipo de prestaciones deberán ser abonados una vez cumplida la obligación de transportar y puestas las mercancías a disposición del destinatario. Puede ocurrir que la mudanza se ejecute de forma parcial, el porteador sólo podrá exigir el pago del precio y los gastos en proporción a la parte que se haya ejecutado, siempre que ésta reporte un beneficio para el deudor. Si la inejecución es debida a causas imputables al cargador o destinatario entonces tendrá el derecho el porteador a reclamar el cobro íntegro.

En defecto de pacto del precio, el art. 39.4 LCTTM establece de modo supletorio que el precio del transporte será *el que resulte usual para el tipo de servicio de que se trate en el momento y lugar en el que el porteador haya de recibir las mercancías. En ningún caso se presumirá que el transporte es gratuito.*

Además de la obligación principal nos encontramos con otras obligaciones específicas que debe asumir el cargador en un contrato de mudanza, como son el deber de información y documentación. Estas obligaciones constituyen un deber de

colaboración del cargador para la ejecución del contrato por parte del porteador y son exigibles, siempre y cuando éste las requiera.

El cargador, según establece la LCTTM, debe informar al porteador sobre las circunstancias que tengan relevancia para la correcta ejecución de la mudanza. Estas circunstancias se pueden resumir genéricamente en un deber de información de las condiciones de acceso de los vehículos y de las personas a las instalaciones, viviendas o locales donde se esté realizando el traslado (aparcamiento, altura de la vivienda, pasillos, escaleras, montacargas, posibilidad de uso de los ascensores, obras paralelas en los locales contiguos, etcétera) y, además suministrar la documentación debida para el mismo siempre y cuando el porteador la solicite (art. 74.2 LCTTM).

Para la ejecución del contrato de mudanza, el porteador necesita disponer de cierta información que influye directamente en la correcta realización de la mudanza. Esta información deberá aportarla el cargador porque es él quien conoce sus instalaciones o locales donde se encuentran los bienes objeto de la mudanza. Esta es otra de las peculiaridades del contrato de mudanza. A diferencia del contrato de transporte en general, el contrato de mudanza se suele dar en entornos privados como pueden ser el domicilio del cargador o cualquier otra zona de acceso particular.

En caso de pérdida o avería de los bienes transportados y cuando el porteador pueda probar que ha habido verosímilmente riesgo de que la información suministrada por el cargador fuera falsa o incorrecta, el porteador quedará exonerado de responsabilidad según el art. 75.1.d) LCTTM.

En cuanto a los costes de los servicios adicionales necesarios para llevar a cabo el contrato de mudanza, según la cláusula sexta, párrafo dos, de las condiciones generales contenidas en el Anexo III de la Orden de la Comunidad de Madrid de 2005, *para efectuar la carga y/o descarga de los vehículos, estos deben poderse situar en la puerta de ambos domicilios, el de recogida y el de entrega, o como máximo a una distancia no superior a 25 metros a pie, pero si por cualquier circunstancia (estrechez en las calles o avenidas, aparcamiento limitado o prohibido, etcétera) no se consiguiera la citada colocación del vehículo y ello implicara un incremento de mano de obra el uso de medios adicionales de transporte (camionetas u otros), los gastos que ocasionaran estos servicios complementarios serían a cuenta del cliente.* Dicho esto, se extrae del tenor literal de este párrafo, que es el cargador/destinatario el obligado a

pagar el precio total de los servicios adicionales que sean necesarios para la debida colocación del vehículo y por consiguiente, para la correcta realización de la mudanza.

Por último, debemos hacer referencia a los gastos derivados de los trámites administrativos o permisos que sean necesarios para realizar la mudanza. Del art. 15 del contrato-tipo de mudanza de FEDEM dice que *todo tipo de impuestos locales, arbitrios municipales, derechos de Aduanas, certificados de origen o de traslado de residencia, gastos consulares, transbordos, trípticos, etc., no se incluyen en el precio del servicio salvo estipulación contraria*. Todo esto queda regulado en la cláusula octava, del Anexo III de la Orden de la Comunidad de Madrid de 2005. Además se indica que las eventuales formalidades administrativas necesarias para ejecutar la mudanza correrán a cargo de la empresa transportista y está, estará obligada a justificarlos documentalmente estos gastos.

VI. RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR

1. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD

El régimen de responsabilidad del porteador en los contratos de mudanzas se recoge en el Capítulo V de la LCTTM. Esta es la responsabilidad genérica para todo tipo de transporte de mercancías por carretera y transporte fluvial, y se aplicará al contrato de mudanza, salvo las peculiaridades que después veremos. Si la mudanza se realizara por mar o aire tendríamos que acudir a la normativa aplicable al transporte de mercancías aéreo²⁷ o marítimo²⁸.

Se trata de un régimen general con ciertas particularidades recogidas en el art. 75 LCTTM y siguientes del Capítulo VIII de la misma ley.

La responsabilidad del porteador es objetiva y cuantitativamente limitada²⁹. Se trata de la responsabilidad por daños en casos de averías, pérdida de la mercancía (total o

²⁷ Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea.

²⁸ Art 277.1, de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.

²⁹ Cuando hablamos de limitación de la responsabilidad, se quiere decir que por pacto o por disposición legal no rige el principio del resarcimiento integral del daño porque el objeto de la obligación resarcitoria, la indemnización debida, no puede exceder de determinada cuantía.

parcial) y retraso en la entrega³⁰. El porteador, si prueba la concurrencia de alguna de las causas de exoneración, puede exonerarse total o parcialmente de responsabilidad. Respecto al criterio de imputación de responsabilidad, el sistema que prevé la LCTTM es sustancialmente más ventajoso que la carente regulación anterior. En concreto, lo que se dice es que el porteador responderá de los daños derivados del retraso en la entrega, así como de la pérdida total o parcial de las mercancías, y de las averías que sufran las mismas en el trayecto hasta su entrega en destino.

El sistema se completa, de una parte, con el establecimiento de causas de exoneración de responsabilidad y de presunciones de exoneración. Así, el porteador no responderá cuando pruebe que la pérdida, la avería o el retraso han sido ocasionados por culpa del cargador o destinatario, por una instrucción de éstos, por vicio propio de las mercancías o por circunstancias que el transportista no ha podido evitar y cuyas consecuencias no pudo impedir³¹.

En cuanto a las presunciones de exoneración, el porteador también quedará exonerado cuando pruebe que, atendidas las circunstancias del caso, la pérdida o avería han podido resultar verosímilmente de alguno de los riesgos enumerados en el art. 49 de la LCTTM.

En la práctica se utilizaban y utilizan unas cláusulas específicas que recogen la responsabilidad del porteador. Se puede observar en el contrato tipo, que se incluye en este mismo trabajo como Anexo I, en su cláusula duodécima en la que se indica que: «El transportista, salvo caso de dolo o negligencia grave equiparable al dolo, sólo responderá, en caso de pérdida o avería, de conformidad con lo previsto en el art. 363 del Código de Comercio, del valor de los muebles y enseres declarado en el inventario, sin que responda del lucro cesante ni de los daños morales». Por supuesto, esta cláusula recogida en el contrato-tipo del Anexo I de este mismo trabajo es anterior a la nueva regulación de la LCTTM actual ya que nos redirige al Código de Comercio.

Como hemos comentado, actualmente, el sistema parte de la responsabilidad del porteador pero con el establecimiento de causas de exoneración de responsabilidad y de presunciones de exoneración.

³⁰ PETIT LAVALL, M V., «El contrato de mudanza en la LCTTM», *Revista de derecho del transporte: Terrestre, marítimo, aéreo y multimodal*, nº6, 2010, p.358.

³¹ BROSETA PONT, M., «Contratos de custodia y de transporte (I) », *Manual de Derecho Mercantil*, 20ª ed., 2013, p. 170.

Respecto a las presunciones de exoneración hay un régimen un tanto singular regulado en el art. 75 LCTTM. También recoge el mismo Capítulo VIII, los límites de responsabilidad en su art. 76 LCTTM y la exigencia de reservas o reclamación escrita para el ejercicio de las acciones por pérdida o avería en el art 77 LCTTM.

2. PRESUNCIONES DE EXONERACIÓN EN EL CONTRATO DE MUDANZA

2.3 Causas generales de exoneración de responsabilidad

Respecto a las causas de exoneración el art. 75.1 de la LCTTM, nos remite al régimen general en cuanto a las causas ordinarias regulado en el art. 48 de la misma ley. Por lo que el porteador queda exonerado o no responde de los hechos si prueba que la pérdida, la avería o el retraso producido han sido ocasionados por culpa del cargador o del destinatario, por una mala instrucción, por vicio oculto de las mercancías o por circunstancias que el porteador no haya podido evitar e impedir. No se exonera al porteador cuando alegue como causa defectos de los vehículos empleados en el transporte afecto a la mudanza y, además, responde proporcionalmente al daño causado; si hay una causa que exonera al porteador y otra no, sólo responde en la medida en que esta última haya contribuido a producir el daño³².

2.4 Presunciones de exoneración de responsabilidad

La normativa establece unas causas taxadas recogidas en el art. 75 LCTTM. Cuando concurra una de estas causas el porteador podrá quedar exonerado de responsabilidad sin tener que probar que estas circunstancias han producido la pérdida o avería de los bienes transportados en la mudanza. Simplemente basta con que pruebe que se ha producido dicha circunstancia. Nos encontramos con una presunción *iuris tantum* de la relación de causalidad, es decir, el daño ha sido provocado por uno de estos motivos y corresponderá al cargador probar lo contrario.

³² SAP de Palencia, Sentencia núm. 4/1998, de 12 de enero, AC/1998/3192. Ejemplo en el que el porteador responde de la pérdida parcial de las mercancías transportadas.

Por tanto, tenemos unas causas concretas o específicas recogidas en el art. 75 LCTTM, que son muy frecuentes en el contrato de mudanza. Por eso la ley las recoge como causas privilegiadas y son las siguientes:

2.4.1 Deficiencias en el embalaje o marcado de los bienes realizado por el cargador

La encontramos en la letra a) del art. 75.1. Lo primero que hay que tener en cuenta es que según el art. 74.1 LCTTM, salvo que se haya pactado lo contrario, el embalaje y marcado de los bienes objeto de la mudanza es en principio, obligación del porteador. En consecuencia, si el porteador es quién ha embalado o marcado los bienes no podrá alegar esta presunción de exoneración, quedando así responsable de los daños ocasionados.

Si por el contrario, es el cargador el que ha quedado obligado a realizar el embalaje y marcado de los bienes y enseres objeto de la mudanza, el porteador podrá alegar y probar las deficiencias y por ello, quedar exonerado de responsabilidad.

Esta causa de exoneración privilegiada o presunción de exoneración se encuentra en conexión con las causas establecidas en el régimen general del art. 49.1.b) LCTTM, relativa a la ausencia o deficiencia en el embalaje de las mercancías, y del art. 49.1.e) LCTTM, que tiene que ver con la deficiencia en su identificación o señalización, pero opera de manera contraria al transporte, en general, ya que en él las asume el cargador según el art. 21 LCTTM³³.

Los defectos del embalaje y marcado no deben ser claros y perceptibles ya que, el porteador tiene la obligación de comprobar el embalaje de las mercancías, según recoge el art. 25.1 LCTTM. En el momento de recoger las mercancías, el porteador debe comprobar su estado aparente y el de su embalaje, es decir, realizar un reconocimiento externo de los bienes objeto de la mudanza y verificar si se encuentran acondicionadas correctamente. Si las mercancías no se entregan adaptadas a la mudanza, podrá el porteador rechazar los bultos o bienes que estime oportuno y se lo comunicará inmediatamente al cargador (art. 27.1 LCTTM).

³³ SAP de Bilbao, (Sección 2ª), Sentencia núm. 155/2016, de 28 de abril, SJM BI 1748:2016.

La cláusula novena del contrato-tipo del Anexo I recogido en este mismo trabajo nos dice que «El cliente hará una declaración del valor global del mobiliario y enseres, así como una declaración detallada de los objetos que puedan tener un valor particular, en la que deben identificarse claramente los bienes de carácter artístico, histórico o de colección y aquellos cuyo valor unitario supere la cantidad de 600 euros» quedando aparente la obligación del cargador de identificar este tipo de bienes de manera clara y precisa.

2.4.2 *La manipulación efectuada por el cargador*

Esta es la segunda causa que recoge el art. 75.1.b) LCTTM paralela con el art. 49.1.c) LCTTM. En las mudanzas, al igual que sucede con el embalaje y marcado de los bienes objeto de la misma, es el porteador el que tiene la obligación de realizar la manipulación de los bienes para su traslado, salvo pacto en contra (*iuris tantum*). Por tanto, sólo podrá alegarse la presunción de exoneración cuando sea el cargador el que ha manipulado los bienes sin seguir órdenes del porteador y bajo su exclusiva responsabilidad.

Del mismo modo que el art. 49.1, c) de la LCTTM, el art. 75.1, b) exonera al porteador en caso de que la manipulación de los bienes objeto de traslado sea efectuada por el cargador. Aunque en el contrato de mudanza, en principio, el obligado a realizar dichas manipulaciones es el porteador, cabe la posibilidad de que se haya pactado que el obligado a realizarlas sea el cargador, en ese caso sí que constituiría una presunción de exoneración.

Por otro lado, cabe destacar que si el cargador es quien manipula los bienes objeto del traslado siguiendo las instrucciones del porteador, éste último no podría quedar exonerado alegando esta presunción de exoneración.

2.4.3 *Carga o descarga de bienes cuya dimensión o peso no sea adecuado para los medios de transporte acordados, siempre que el porteador haya avisado al cargador del riesgo de daños y éste hubiera insistido en la ejecución de la prestación*

Nos encontramos aquí, con una causa exclusiva y específica del contrato de mudanza, es decir, no existe paralelismo con otras causas generales del contrato de

transporte. Dada la complejidad y los elementos de distinta naturaleza que integran los bienes a transportar podemos encontrarnos frecuentemente con este riesgo tan particular en el contrato de mudanza.

En líneas generales ocurre cuando el peso o dimensiones de algún bien mueble aconsejan el empleo de otros medios técnicos más adecuados para la realización del traslado y, por consiguiente, incrementan en exceso el precio de la mudanza. Por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona³⁴, referida a los daños causados a un piano (un bien de peso y dimensiones amplias) en la que el cargador, advertido por el porteador de los posibles daños que se puedan efectuar en el mueble por no realizar la mudanza con los medios adecuados, insiste en su traslado y carga y descarga. Si, pese a todo, insiste en el traslado y se le causan daños, deberá asumir los mismos. El porteador podrá exonerarse de responsabilidad cuando haya informado de los métodos adecuados para realizar la mudanza y el cargador haya insistido en su realización sin emplear medios distintos adecuados para evitar posibles daños. Respecto a la prueba, el porteador deberá hacer constar el aviso al cargador de forma escrita.

2.4.4 *Falsedad o incorrección de la información proporcionada por el cargador*

Esta causa de exoneración está interrelacionada con el deber de información y documentación que tiene el cargador, a requerimiento del porteador, encontrándose recogida en el art. 74 LTTM. Este deber de colaboración mutua tiene su fin en la correcta realización de la mudanza. Tampoco se encuentra esta causa de exoneración entre las causas generales del art. 49 LCTTM y está prevista para toda falsedad o incorrección de la mudanza, por lo tanto, no sólo para la información necesaria o relevante.

El art. 74.2 LCTTM obliga al porteador a solicitar al cargador información sobre circunstancias relevantes, tales como las condiciones de acceso de los vehículos y de las personas a las instalaciones, viviendas o locales afectados por el traslado. También vemos mencionada esta obligación en las condiciones generales de la cláusula sexta del Anexo I incluido en este mismo trabajo³⁵. Ahora bien, si la información proporcionada

³⁴ SAP de Barcelona (Sección 1ª.), Sentencia núm. 343/2013, de 8 de julio, JUR/2013/329266.

³⁵ A requerimiento del transportista, el cliente deberá informar al transportista de las circunstancias relevantes para la correcta ejecución de las actividades en qué consiste la mudanza, así, por ejemplo, de

por el cargador es falsa o incorrecta el porteador quedará exonerado de su responsabilidad tras probar la concurrencia de dicha circunstancia y la relación directa entre el daño causado y la falsedad o incorrección de dicha información.

El porteador no está obligado a comprobar si la documentación puesta a su disposición está completa o es la correcta (art. 74.3 LCTTM). Si la información es falsa o inexacta o la documentación es incompleta o incorrecta, será el cargador el que asuma las consecuencias del daño ocasionado por la mudanza.

Por tanto, dicho precepto se aplicará generalmente a cualquier información falsa o incorrecta que provenga del cargador independientemente de si el porteador la haya solicitado o no, y, evidentemente, que pueda constituir un riesgo que pueda derivar en daños en los bienes objeto de la mudanza.

1.2.5 Transporte de animales vivos o plantas

Esta causa de exoneración del porteador coincide con la señalada en el artículo 49.1.f), sin embargo, en lo previsto para el régimen del contrato de mudanza se le ha añadido el transporte de plantas dado que en este tipo de traslados es más habitual el transporte de plantas que de animales vivos.

Aunque la inclusión del precepto parece del todo innecesaria, puesto que perfectamente se puede entender incluida en la presunción de exoneración del art. 75.1.f) LCTTM, es decir, por la naturaleza propia de los bienes objeto de la mudanza.

No obstante, en caso de que se trasladen animales vivos en una mudanza, se aplicará lo previsto en el art. 50 LCTTM. Por lo cual, para que el porteador pueda alegar dicha causa para exonerarse deberá probar que ha adoptado las medidas que le incumben y ha seguido las instrucciones especiales que pudieran haberle sido impartidas para la correcta realización del traslado de los animales. Se deben cumplir cuatro requisitos: que el objeto del transporte son animales vivos; que el daño sufrido se deba a la especial naturaleza de los bienes; que se hayan adoptado las medidas que normalmente exige el traslado y que se hayan seguido las instrucciones que le haya

las condiciones de acceso a los locales o viviendas para el personal y los vehículos (aparcamientos, altura de la vivienda, pasillos, escaleras, montacargas, posibilidad de uso de ascensores, otros trabajos en curso en los respectivos locales, etc.).

impartido el cargador. Es decir, se debe probar que la responsabilidad ha sido exclusivamente de éste último y no siguiendo órdenes o instrucciones del porteador. En caso contrario, no se podrá utilizar la causa de exoneración contemplada en este apartado.

1.2.6 Naturaleza propia de los bienes objeto de la mudanza

Es una presunción de exoneración que sigue la misma línea que la que se establece en el art. 49.1.d). En la cual, se hace referencia a la naturaleza de los objetos que son propensos a dañarse (cerámicas, porcelanas, etc. y en general objetos frágiles). En lo que se refiere a la naturaleza propia de los bienes no se hace referencia al supuesto de que los objetos al ser entregados al porteador estaban dañados, sino que sus propias características hacen que no sean tan resistentes a los traslados y que sean propensos a sufrir cualquier daño.

En la cláusula duodécima del contrato-tipo del Anexo I de este mismo contrato³⁶ encontramos alguna referencia expresa a algunos bienes o enseres que por sus características y naturaleza propias son propensos a sufrir daños.

1.3 La prueba en contrario

Finalmente, el art. 75.2 LCTTM, en conexión con el art. 49.2 LCTTM, recoge la posibilidad de prueba en contrario: *No obstante, el legitimado para reclamar podrá probar que el daño no fue causado, en todo o en parte, por ninguno de tales riesgos. Cuando resulte probado que el daño fue parcialmente causado por una circunstancia imputable al porteador, éste sólo responderá en la medida en que la misma haya contribuido a la producción del daño.* En consecuencia, pese a que inicialmente el transportista hubiera quedado exonerado de responsabilidad, estese generará porque le cargador o destinatario pruebe lo contrario. En caso de que el daño se haya producido parcialmente por una causa que no exonera al porteador, éste sólo responderá en la medida en que haya contribuido a la producción del daño.

³⁶ El transportista no responderá de los daños estéticos originados por descabalamiento de vajillas, cristalerías, cuberterías, juegos de sillones y similares.

VII. LA LIMITACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

En el contrato de mudanza, aparte de los preceptos que dedica la Ley en el capítulo VIII, también será de aplicación, en lo que se refiere al sistema de responsabilidad, los previstos en el capítulo V de la misma Ley. De este modo, en caso de pérdida o avería de los bienes, la indemnización a satisfacer al cargador, tendrá como límite el valor de los no entregados o a la reducción de valor de los entregados en base a los arts. 53 y 54 LCTTM.

Respecto a los límites no resultan de aplicación al contrato de mudanza los previstos en el art. 57.1 y 2 LCTTM, es decir, un tercio del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día por cada kilogramo de peso bruto de mercancía perdida o averiada, sino que establece un límite propio para el contrato de mudanza en su art. 76.1 LCTTM *la responsabilidad del porteador por daños o pérdida de los bienes transportados no podrá exceder de veinte veces el Indicador Público de Efectos Múltiples/día por cada metro cúbico del espacio de carga necesario para el cumplimiento del contrato.*

Dado que actualmente el IPREM/día por metro cúbico alcanza valores del 17,93 €³⁷, la cuantía de la indemnización (que no puede exceder de veinte veces el IPREM/día por cada metro cúbico transportado) se situaría en unos 358,6 euros por metro cúbico. Este límite ha sido modificado por decisión parlamentaria reduciéndose sustancialmente el límite de la indemnización.

A diferencia de lo que sucede en el transporte de mercancías, en la mudanza el límite máximo de indemnización no se calcula en función de los kilogramos brutos de peso sino del espacio de carga necesario para efectuar la mudanza. Entonces es el volumen de espacio contratado el que se utiliza con más frecuencia³⁸.

Ahora bien, dado que, el cargador es en la mayoría de las ocasiones un consumidor, por lo que es más probable que haya un desconocimiento de éste en muchos aspectos de la mudanza, tiene en la normativa actual un tratamiento especial. Aunque el citado artículo 76.1 LCTTM no hace referencia a la obligación del porteador

³⁷ Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, de 27 de junio.

³⁸ Así queda reflejado en el art. 3 del contrato tipo de mudanza de FEDEM ya que lo normal en las mudanzas es que se desconozca el peso de los distintos bienes transportados.

de informar al consumidor de dichos límites de responsabilidad sí que tenemos otras normativas aplicables que regulan dicha obligación de información.

Para ello, deberemos acudir a la LGDCU, cuyo art. 59.2 determina que *los contratos con consumidores y usuarios se regirán, en todo lo que no esté expresamente establecido en esta norma o en leyes especiales, por las disposiciones legales que regulan los contratos civiles y mercantiles*. Por otro lado, según el art. 60 de la misma Ley, el porteador *deberá poner a disposición del consumidor y usuario de forma clara, comprensible y adaptada a las circunstancias la información relevante, veraz y suficiente sobre las características esenciales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas*. De tal manera se deduce que la limitación de la responsabilidad contemplada en el art. 76 LCTTM debe considerarse e informarse al consumidor antes de formalizar el contrato de mudanza, para que éste sepa cuál es la cuantía máxima indemnizatoria que puede percibir³⁹.

Merece destacar que el propio art. 76.2 LCTTM menciona expresamente la inaplicación del límite establecido en el art. 76.1 en lo que respecta a los bienes distintos de los transportados. Se trata de supuestos muy frecuentes en la práctica en los que con ocasión de la mudanza se producen daños a otros bienes, como, por ejemplo, los daños a los inmuebles que sean propiedad del cargador o de terceros.

Esto puede crearnos dudas acerca de la inaplicación del art. 76.2 LCTTM, es decir, podría ser porque estuviéramos ante un caso de responsabilidad extracontractual sometido a las normas del Código Civil o porque es una responsabilidad derivada del contrato de mudanza en la que no es de aplicación dicho límite.

Si nos encontráramos en el primer caso, teniendo en cuenta que estaría sometido a las reglas del Código Civil, se exigiría culpa o negligencia derivada de los actos del porteador, y por lo cual, éste respondería de manera ilimitada. En el segundo caso, si el porteador responde a efectos de las normas del contrato de mudanza, para que pueda

³⁹En el mismo sentido, se ha pronunciado la SAP Asturias 142/2005, de 15 de abril, que ha considerado que “es el empresario transportista el que debe informar convenientemente y en términos comprensibles al usuario de la posibilidad legal de declarar el valor real de la mercancía a los efectos de obtener una mayor indemnización que cubra el total valor de la carga; y sólo en el supuesto de que el empresario transportista pruebe cumplidamente que el usuario conocía esa limitación y la posibilidad de eludir la misma operaría aquélla. Es, así, el empresario quien debe acreditar que informó convenientemente al consumidor si quiere beneficiarse de tal medida excepcional de limitación de su responsabilidad, a fin de dar opción a aquél de declarar el valor de las mercancías y, en su caso, abonar el suplemento”.

exonerarse de dicha responsabilidad, debe atenerse a alguno de los supuestos de exoneración y, desde luego, probar su concurrencia.

Si los daños se producen en los bienes de terceros que no tienen relación contractual con el porteador, como aquellos que se producen en el inmueble propiedad de una comunidad ajena al contrato de mudanza (vecinos, comunidad de propietarios), queda claro que la relación que guardan entre sí es extracontractual. El margen de responsabilidad queda fuera del contenido en la LCTTM, y, por consiguiente, se aplicarían las normas reguladoras de la responsabilidad extracontractual (arts. 1.902 y ss. CC) y no las relativas al contrato de mudanza.

Por otro lado, en los supuestos en que se hayan producido daños en bienes ajenos a los transportados, la ley no se refiere expresamente al carácter de dicha responsabilidad. Aun suponiendo que es una responsabilidad extracontractual, se aplicarían las normas relativas a la responsabilidad del porteador y no las relativas a la responsabilidad civil extracontractual. Es decir, se emplean las normas contenidas en la LCTTM. La explicación la tenemos en el art. 63 de la misma Ley: *El régimen de responsabilidad previsto en este capítulo será aplicable a toda acción que persiga una indemnización por daños y perjuicios derivados del transporte con independencia de si es contractual o extracontractual.*

VIII. RESERVAS

Según el art. 77 LCTTM *“la acción por pérdida o avería de los bienes objeto de la mudanza se extingue si el destinatario no manifiesta por escrito sus reservas al porteador o a sus auxiliares en el momento de la entrega o, en caso de pérdidas y averías no aparentes, dentro de los siete días siguientes al de la entrega, descontando domingos y festivos”*.

De esta forma, y siguiendo la misma orientación del régimen general de las reservas en el transporte ordinario de mercancías, es necesario que el cargador/destinatario, a efectos de poder dirigir una reclamación contra el porteador, formule las oportunas reservas sobre el estado de los bienes. Por lo cual, si los daños son aparentemente visibles, las reservas deben formularse en el momento de la entrega y, si no lo son,

puede manifestar las oportunas reservas en un plazo de siete días contados a partir del día de la entrega descontando los domingos y festivos⁴⁰.

En este caso, si el cargador/destinatario no formula las correspondientes reservas en el plazo señalado (si los daños son apreciables, en el momento de la entrega y si son ocultos, en el plazo señalado en el artículo 77 LCTTM, es decir, de siete días siguientes al de la entrega, descontando domingos y festivos), ya no podrá presentar la reclamación.

Una cualidad importante del contrato de mudanza, es que en la mayor parte de las ocasiones, uno de los intervinientes es un consumidor. Por esta razón, el legislador ha optado por introducir una mención específica en el apartado 2 del mismo artículo 77. En este sentido, el art. 77.2 establece que lo dispuesto en el art. 77.1 *“no se aplicará cuando el destinatario sea un consumidor y el porteador no le haya informado por escrito, de forma clara y destacada, antes de la entrega, acerca de la forma y plazos en que deberá manifestar las reservas así como de las consecuencias de la misma”*.

De esta manera, el porteador, queda obligado, a informar al consumidor de las condiciones jurídicas y económicas del contrato. De esta forma el legislador reproduce el art. 59.2 LGDCU que ya contemplaba esta obligación de información al consumidor.

⁴⁰ A diferencia de lo que ocurre con el transporte general que el plazo son siete días sin descontar los domingos y festivos. Por lo tanto, en la mudanza el plazo es más largo.

IX. CONCLUSIONES

La regulación del contrato de mudanza constituye una novedad importante que se introdujo en la LCTTM. Aunque en términos generales se trate de un contrato de transporte, presenta ciertas especificidades o peculiaridades (objeto, responsabilidad del porteador) que lo distinguen del transporte ordinario de mercancías, y por lo cual, se merece una atención especial por parte de la normativa española.

Anteriormente, existían discrepancias sobre la concepción jurídica y la legislación que regulaba este tipo de contratos. La concepción como contrato de transporte con especificidades es la que, ha primado actualmente, como quedo reflejado por el legislador en la actual LCTTM introduciendo un Capítulo nuevo en su articulado (Capítulo VIII).

Se establece una nueva regulación con especificidades para diferenciarlo del transporte terrestre común de mercancías. El contrato de mudanza se diferencia del transporte terrestre ordinario de mercancías en lo concerniente al objeto a transportar. A diferencia del contrato de transporte terrestre de mercancías que se refiere al transporte terrestre de mercancías en términos generales por medios mecánicos con capacidad de tracción propia (art.1 LCTTM). Bien es cierto que, está sometido a la normativa aplicable al modo de transporte utilizado (terrestre, marítimo, aéreo) en cuanto no se oponga al Capítulo VIII LCTTM.

El contrato estudiado se caracteriza en la práctica como un contrato con consumidores, es decir, es, en la mayor parte de las ocasiones, un contrato de consumo. Por tanto, será de aplicación la normativa de derecho de consumo, la LGDCU. El consumidor, es la parte débil en la relación contractual. De ahí que se deriven una serie de derechos específicos y exista una prevalencia en la protección de éste como agente en el mercado.

Respecto a la documentación exigida en el contrato, es de obligación a cargo del porteador la presentación de un presupuesto previo en la que consten los servicios, costes y gastos que se presentarán al realizar el contrato de mudanza. Además de los gastos con ocasión de los trámites o permisos administrativos que sean necesarios para

la misma. Debemos hablar también de una formalización del inventario que las partes podrán exigirse mutuamente donde deben recogerse todos los bienes objeto de la mudanza.

En referencia a los deberes y obligaciones del porteador, destacamos la obligación de carga y descarga, la obligación de solicitar al cargador información sobre las circunstancias relevantes para la correcta ejecución de la mudanza y, además, el deber de informar al cargador respecto a las normas administrativas que sean aplicables para completar el traslado pactado en el contrato y, sobre la concertación de un contrato de seguro que cubra los posibles desperfectos o deterioros en los bienes objeto de la mudanza. Este último deber de información se requiere con más intensidad cuando el cargador deviene ser un consumidor.

Por otro lado, en relación con las presunciones de exoneración del porteador están reguladas en el art. 75.1 LCTTM, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 48 de la misma ley.

En relación con los límites de indemnización, la ley establece un límite específico para este tipo de contratos. La responsabilidad del porteador por daños o pérdida de los bienes transportados no podrá exceder de veinte veces el IPREM/día, por cada metro cúbico del espacio de carga necesario para el cumplimiento del contrato. Otra diferencia que se establece con el transporte terrestre de mercancías es que en la mudanza el límite máximo de indemnización lo calculamos según el espacio de carga necesario para efectuarla y no en función de los kilogramos brutos de peso. Este límite deberá informarse y suministrarse al cargador ya que, como hemos comentado, en la mayor parte de las ocasiones el cargador resulta ser un consumidor.

La ley reconoce un plazo de siete días, exceptuando domingos y festivos (a diferencia del transporte terrestre de mercancías general), al cargador para formular las correspondientes reservas, a efectos de poder dirigir una reclamación contra el porteador. Este plazo se formula cuando los daños en los bienes objeto de la mudanza están ocultos o no son visibles aparentemente, cuando los daños sean visibles las reservas deben formularse en el momento mismo de la entrega de los bienes. Además el art. 77.2 LCTTM regula una excepción para cuando el cargador se trate de un consumidor y el porteador no le haya informado convenientemente de las condiciones jurídicas y económicas del contrato.

X. FUENTES CONSULTADAS

Normativa:

- Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres.
- Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres.
- Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías.
- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
- Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación.
- Orden de Madrid, de 11 de noviembre de 2005, de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que se regula la creación de un Registro de Empresas de Mudanzas, se establece un logotipo para las empresas inscritas y se aprueba un contrato-tipo de mudanzas.
- Código de Buenas Prácticas en el Sector de Mudanzas y Guardamuebles del Ayuntamiento de Madrid. M-4.009-2006.
- Convenio de Ginebra, de 19 de mayo de 1956, relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera.
- Convenio de Roma, de 19 de junio de 1980, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.
- Reglamento (CE) nº 561/2006, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera. DOUE 11/04/2006 L-102/1.
- Convenio Colectivo del Sector Transportes de Mercancías, Mudanzas, Guardamuebles y Logística de Zaragoza Núm. 8.091

Obras bibliográficas:

- BADA DE COMINGUES, M., DUQUE DOMÍNGUEZ, J. F., Y MARTÍNEZ SANZ, F., *Comentarios a la Ley de Transporte Terrestre*.

- BROSETA PONT, M., «Contratos de custodia y de transporte (I) », *Manual de Derecho Mercantil*, 20ª ed., 2013, p. 170.
- GARCÍA VIDAL, A., «El concepto de consumidor en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios», *El derecho mercantil en el umbral del siglo XXI: libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Novoa con motivo de su octogésimo cumpleaños*, Marcial Pons, Madrid, 2010, p. 545-556
- MANZANO FERNÁNDEZ, M. M., «El contrato de mudanza», *Contratos de prestación de servicios y realización de obras (II)*, *Contratos: civiles, mercantiles, públicos, laborales e internacionales, con sus implicaciones tributarias*, Aranzadi, 2014, p. 176-273
- MARTÍNEZ SANZ, F., y MUNDO GUINOT, M., «Régimen jurídico del contrato de mudanza en el derecho vigente y en el proyecto de ley del contrato de transporte terrestre de mercancías», en *Estudios sobre derecho y economía del transporte: reforma y liberalización*, Tecnos, 2009, p. 336-358
- QUESADA SÁNCHEZ, A. J., «Apuntes sobre la protección del cargador, como consumidor, en el contrato de mudanza», *Contrato de obra y protección de los consumidores*, Aranzadi, 2014, p. 1139-1166
- RODRÍGUEZ RUIZ DE VILLA, D., «El contrato de mudanza en la Ley del contrato de Transporte Terrestre de Mercancías de 2009», *Régimen del transporte en un entorno económico incierto*, Marcial Pons, 2011, p. 263-290

Artículos:

- PETIT LAVALL, M V., «El contrato de mudanza en la LCTTM», *Revista de derecho del transporte: Terrestre, marítimo, aéreo y multimodal*, nº6, 2010, p. 343-365.
- QUESADA SÁNCHEZ, A. J., «Las obligaciones de traslado, carga y descarga en el contrato de mudanza», *Revista de derecho del transporte: Terrestre, marítimo, aéreo y multimodal*, 2014, p.73-91.

Sentencias:

- SAP de Madrid, (Sección 21ª), Sentencia núm. 77/2010, de 23 de febrero, JUR/28079370212010100076.
- SAP de Pontevedra, (Sección 6ª), Sentencia núm. 634/2012, de 09 de diciembre, JUR/634/2012.
- SAP Alicante (Sección 6ª), Sentencia núm. 374/2008 de 6 de agosto, JUR 2008/271820.

- SAP de Asturias, (Sección 6ª), Sentencia núm. 210/2008, de 25 de julio, JUR/3304437006.
- SAP de Bilbao, (Sección 2ª), Sentencia núm. 155/2016, de 28 de abril, SJM BI 1748:2016.
- SAP de Madrid, (Sección 25ª), Sentencia núm. 700/2006, de 21 de mayo, JUR/2006/50089.
- SAP de Madrid, (Sección 9ª), Sentencia núm. 132/2011, de 04 de marzo, JUR/2011/34573.
- SAP de Zaragoza, (Sección 5ª), Sentencia núm. 284/2006, de 21 de julio, JUR/2006/11467.
- SAP Badajoz (Sección 1ª.), Sentencia núm. 598/2001 de 26 de abril, JUR 2001/173043.
- SAP de A Coruña (Sección 5ª.), Sentencia núm. 68/2009, de 2 de marzo, JUR/2009/285371.
- SAP de Asturias (Sección 1ª.), Sentencia núm.130/2005, de 6 de abril, JUR/2005/99678.
- SAP de Barcelona (Sección 1ª.), Sentencia núm. 343/2013, de 8 de julio, JUR/2013/329266.
- SAP de Barcelona (Sección 1ª.), Sentencia núm. 458/2005, de 19 de mayo, JUR/2004/27789.
- SAP de Burgos (Sección 3ª.), Sentencia núm. 435/2011, de 30 de diciembre, JUR/2012/32912.
- SAP de Las Palmas (Sección 3ª.), Sentencia núm. 588/2005, de 5 de diciembre, JUR/2006/65553.
- SAP de Las Palmas (Sección 3ª.), Sentencia núm. 603/2004, de 30 de noviembre, JUR/2005/48029.
- SAP de Madrid, (Sección 28ª), Sentencia núm. 164/2016, de 28 de abril, JUR/223/2014.
- SAP de Málaga (Sección 6ª.), Sentencia núm. 106/2011, de 18 de febrero, JUR/2011/342967.

- SAP de Málaga (Sección 6ª.), Sentencia núm. 141/2007, de 6 de marzo, JUR/2007/238440.
- SAP de Palencia, Sentencia núm. 4/1998, de 12 de enero, AC/1998/3192.
- SAP de Pontevedra (Sección 1ª.), Sentencia núm. 803/2013, de 9 de diciembre, JUR/2014/10026.
- SAP de Zaragoza (Sección 1ª.), Sentencia núm. 259/1998, de 20 de mayo, JUR/1998/2285.
- SAP de Zaragoza, (Sección 5ª.), Sentencia núm. 384/2016, de 8 de julio, JUR/335/2016.
- SAP Madrid (Sección 12ª.), Sentencia núm. 235/2007 de 25 de enero, JUR 2007/157129.
- TSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª.), Sentencia núm. 194/2016, de 17 de junio, JUR/2016/192745.
- SAP de Santa Cruz de Tenerife (Sección 1ª.), Sentencia núm. 197/2006, de 21 de abril, JUR/2006/188724.
- SAP de Santa Cruz de Tenerife (Sección 1ª.), Sentencia núm. 348/2008, de 28 de julio, JUR/2008/193439.

XI. ANEXO DE UN CONTRATO-TIPO DE MUDANZA**CONTRATO DE MUDANZA**

De una parte D....., en nombre y representación de la empresa....., con CIF/NIF.....

y domicilio en....., de....., CP....., teléfono.....e-mail..... en lo sucesivo, la empresa transportista.

De otra parte D....., con CIF/ DNI Y domicilio en....., de....., CP....., teléfono.....e-mail..... en lo sucesivo, el cliente.

Que el cliente desea realizar una mudanza de muebles y enseres desde:

Domicilio de recogida:

.....
..... Hasta

Domicilio de Entrega:

.....
.....

La empresa transportista tiene interés en realizar dicha mudanza, por lo que ambas partes acuerdan el presente contrato de mudanza, con arreglo a las siguientes condiciones.

CONDICIONES PARTICULARES

Características del inmueble (altura, ascensor, escaleras y pasillos, necesidad de Polea, etc.)

.....
.....

.....
..... Se ha realizado visita del inspector:

Categoría del servicio (señalar la categoría del servicio contratado según se especifica en la

condición SEGUNDA de las condiciones generales de este contrato).....

.....
.....

Especificaciones en relación con el embalaje (cantoneras, mantas, papel burbuja, armarios para el transporte de ropa, etc.):.....

.....

.....
..... Instalación de electrodomésticos:
Incluido Excluido

Medios técnicos a utilizar:

.....
.....

.....
.....

.....

Precio:

.....

Servicios/Categoría.....

.....

Cajas.....

.....

Seguro.....

.....

Suplementos

(Permisos

municipales,

etc.).....

IVA

21%.....

.....

TOTAL.....

.....

A efectos del seguro el capital asegurado es de....., de conformidad con el inventario de muebles y enseres que se ha realizado.

El seguro está contratado con la compañía aseguradora.....con número de póliza.....y sus característica más relevantes para el cliente son:

.....

.....

Observaciones:

.....

.....

.....
.....

El contrato de mudanzas queda sujeto además de a las condiciones particulares, a las condiciones generales, las cuales, una vez leídas por el cliente, son aceptadas por el mismo, firmándose en prueba de conformidad.

En.....,
a.....de.....de 2.....

Fdo: El cliente Firma y Sello Empresa:

CONDICIONES GENERALES

Condiciones de prestación del servicio

PRIMERA.- El servicio de mudanzas se define como el traslado o acarreo, entre viviendas, locales, u oficinas, en el interior de una población o entre distintas localidades del país o con el extranjero, utilizando uno o varios modos de transporte, de mobiliario, sus complementos, ajuar doméstico y otros enseres domésticos, incluyendo todas o parte de las operaciones de preparación, desarmado o armado, embalaje y demás actividades que requiere este tipo especial de transporte. El servicio no se entenderá cumplido hasta la entrega de los muebles y enseres objeto de la mudanza en el domicilio de destino, en las condiciones pactadas.

SEGUNDA.- Las prestaciones contratadas se ajustarán a la categoría del servicio convenida con el cliente y que se especifica en las condiciones particulares de este contrato.

Las categorías de servicios que el transportista se compromete a prestar, según la que elija el cliente son las siguientes:

A1. Comprende el desmontaje, montaje de muebles de tornillo, embalaje de vajilla, cristalería, menaje diverso, ropas, libros, discos y otros accesorios domésticos, de uso corriente, utilizando envases recuperables, sin mediar intervención de oficios ajenos.

A2. Comprende el desmontaje, montaje de muebles de tornillo, embalaje de vajilla, cristalería, menaje diverso, ropas, libros, discos y otros accesorios domésticos de uso corriente, utilizando materiales de embalaje y envases especiales no recuperables a petición del cliente.

B1. Embalaje y desembalaje por

cuenta del cliente. B2. Desmontaje

y montaje por cuenta del cliente.

C. Se suplementa la categoría A, interviniendo operario especializado en montaje de cortinas accesorios, cuelga de cuadros y fijación de muebles a la pared y conexión eléctrica de aparatos de luz.

TERCERA.- El emplazamiento de los muebles se efectuará una sola vez siguiendo las indicaciones del cliente o mediante plano facilitado por el mismo. Los movimientos suplementarios o las demoras no imputables a la empresa de mudanzas, serán por cuenta del cliente, quien abonará los gastos que se originen.

CUARTA.- No será objeto del contrato de mudanza el transporte de armas de fuego,

de mercancías perecederas o peligrosas, ni de animales. El transportista no aceptará para su transporte estos bienes.

QUINTA.- Salvo pacto en contrario, tampoco será objeto del contrato de mudanza el transporte de dinero en metálico, joyas, piedras preciosas, valores al portador, objetos de plata, obras de arte, objetos antiguos o de colección, etc. El servicio de mudanza no incluye, salvo pacto expreso, el transporte y manipulación de cajas de caudales, pianos, pianolas y objetos de gran volumen o peso.

SEXTA.- A requerimiento del transportista, el cliente deberá informar al transportista de las circunstancias relevantes para la correcta ejecución de las actividades en que consiste la mudanza, así por ejemplo de las condiciones de acceso a los locales o viviendas para el personal y los vehículos (aparcamientos, altura de la vivienda, pasillos, escaleras, montacargas, posibilidad de uso de ascensores, otros trabajos en curso en los respectivos locales, etc.).

Se considera que para efectuar la carga y/o descarga de los vehículos, éstos deben poderse situar en la puerta de ambos domicilios, el de recogida y el de entrega, o como máximo a una distancia no superior a 25 metros a pie, pero si por cualquier circunstancia (estrechez de la calle o avenidas, aparcamiento limitado y prohibido, etc.), no se consiguiera la citada colocación del vehículo y ello implicara un incremento de mano de obra o el uso de medios adicionales de transporte (camionetas u otros elementos aún más ligeros), los gastos que ocasionaran estos servicios complementarios serían de cuenta del cliente.

Pago y otros gastos

SÉPTIMA.- El transportista se compromete a efectuar la mudanza de los muebles y enseres relacionados en el inventario que ambas partes firman, en el precio y los términos pactados en las condiciones particulares, incrementando, en su caso, con los gastos a los que se refiere la condición OCTAVA.

Salvo pacto en contrario, el pago se efectuará, el 50% en el momento de la recogida de los muebles y el otro 50% cuando haya finalizado la mudanza.

El pago no implicará la conformidad del cliente con el servicio prestado, quedando siempre a salvo la posibilidad de reclamar contra la empresa transportista por la deficiente prestación del servicio. El pago podrá hacerse en metálico o mediante cheque conformado o transferencia previa, salvo que las partes hayan pactado otra cosa.

El transportista entregará al cliente, recibo de las cantidades percibidas, y finalizada la mudanza emitirá factura, en los términos previstos en el R.D. 1496/2003, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el valor añadido.

OCTAVA.- Correrá de cuenta de la empresa transportista las eventuales formalidades administrativas necesarias para ejecutar la mudanza.

El pago de toda clase de tasas, derechos de aduanas y demás tributos, certificados de origen o de traslado de residencia, gastos consulares, transbordos, etc., necesarios para la ejecución de la mudanza, no están incluidos en el precio del contrato y vendrán a incrementar este. El transportista viene obligado a justificar documentalmente estos gastos al cliente.

Inventario

NOVENA.- La empresa transportista se compromete a elaborar un inventario de los muebles y enseres objeto de la mudanza, entregando copia sellada y firmada por persona responsable de la empresa, al cliente.

También podrá el cliente elaborar dicho inventario por sí mismo, sellando y firmando copia del mismo la empresa transportista.

El cliente hará una declaración del valor global del mobiliario y enseres, así como una declaración detallada de los objetos que puedan tener un valor particular, en la que deben identificarse claramente los bienes de carácter artístico, histórico o de colección y aquellos cuyo valor unitario supere la cantidad de 600 euros.

La empresa transportista se reserva el derecho a rehusar el transporte de bienes artísticos, históricos o de colección. También se hará constar de forma singular, cualquier objeto cuyo valor unitario sea superior a 600 euros. Se hará constar, asimismo, cualquier mueble que tenga un especial valor.

Podrá anotarse en el inventario cualquier circunstancia referida a los muebles o enseres objetos del transporte que las partes quieran destacar, como el estado de conservación.

Asimismo, cuando a juicio de la empresa transportista exista la posibilidad de deterioro de los bienes objeto de la mudanza, bien por encontrarse en mal estado o porque deban ser sometidos a manipulaciones que puedan entrañar peligro, se expresará claramente esta circunstancia en el inventario, con declinación, en su caso, de responsabilidad por parte de la empresa transportista.

Cuando los bienes objeto del servicio de mudanzas se depositen en cajas, con independencia de que fueran embaladas por el cliente o por la empresa, deberá indicarse, su número. Asimismo, cuando los objetos contenidos en una caja sean de la misma naturaleza y el valor conjunto de los mismos supere los 600 euros, deberá recogerse expresamente en el inventario esta circunstancia.

Seguro sobre las mercancías

DÉCIMA.- La empresa se compromete a asegurar los muebles y enseres objeto del transporte relacionados en el inventario, según el valor que en el mismo se les haya asignado, informando al cliente del nombre de la compañía aseguradora con la que se haya suscrito el seguro, del número de póliza y de cualquier otra circunstancia que pueda tener interés para el cliente, particularmente la existencia de franquicia.

En todo caso, el aseguramiento de la mercancía, no afecta a la responsabilidad contractual del transportista como consecuencia del incumplimiento del contrato de mudanza.

Recepción de la mudanza

UNDÉCIMA.- Concluida la mudanza, el cliente, deberá firmar al transportista copia del inventario, a los efectos de dar su conformidad sobre la recepción de la totalidad de muebles, enseres y cajas que fueron objeto de la mudanza. La firma de dicho documento no podrá demorarse más allá de 24 horas contadas desde la finalización de los trabajos de mudanza.

En este documento se hará constar, asimismo, los daños en muebles y enseres que el usuario haya podido advertir mientras se estaba realizando la mudanza, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Una vez concluida la mudanza, el consumidor dispondrá de un plazo de siete días hábiles, para reclamar a la empresa transportista los daños en muebles y enseres que haya podido constatar. Transcurrido dicho plazo no se admitirá reclamación alguna por pérdida o avería.

Responsabilidad de la empresa transportista

DUODÉCIMA.- El transportista, salvo caso de dolo o negligencia grave equiparable al dolo, sólo responderá, en caso de pérdida o avería, de conformidad con lo previsto en el art. 363 del Código de Comercio, del valor de los muebles y enseres declarado en el inventario, sin que responda del lucro cesante ni de los daños morales.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres, se considerará el capital asegurado a efectos de seguro, como declaración de valor, respondiendo por tanto el transportista hasta el importe de la declaración de valor.

El transportista no responderá de los daños estéticos originados por descabalamiento de vajillas, cristalerías, cuberterías, juegos de sillones y similares.

Salvo las pequeñas reparaciones que pueda realizar por sí mismo el transportista o mediante un profesional del oficio de que se trate, y salvo pacto en contrario, el transportista vendrá obligado a indemnizar económicamente las averías y no a su reparación.

Anulación del contrato y aplazamiento de su ejecución

DÉCIMOTERCERA.- La anulación del contrato o aplazamiento del servicio por indicación del cliente o por conveniencia de la empresa, dará lugar a una indemnización a favor de la parte perjudicada. Dicha indemnización se fija en un tercio del importe de la mudanza, si la parte contraria es notificada con más de tres días y menos de quince antes de la fecha o con la mitad si es inferior.

Si la notificación se produce con más de quince días de antelación a la fecha pactada de inicio de la mudanza, no procederá indemnización por ninguna de las partes.

Protección de datos

DECIMOCUARTA.- Los datos de carácter personal que sean facilitados por los clientes a la empresa, podrán ser objeto de tratamiento informático o de archivo, a los efectos del cumplimiento del contrato, salvo oposición del cliente, teniendo acceso a ellos tan sólo el personal autorizado de la empresa.

En todo caso el cliente tendrá derecho a acceder a los datos que de él se conserven en la empresa, a su rectificación, cancelación y oposición.

Estos datos no podrán ser objeto de cesión a otras empresas.

DECIMOQUINTA.- Para cualquier litigio que surgiera del cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a las Juntas Arbitrales del Transporte que resulten competentes conforme a lo establecido en la Ley 16/1987 de Ordenación de Transporte Terrestre y su reglamento de desarrollo, el R.D. 1211/1990.

Fdo: El cliente

Firma y Sello Empresa: